

China y Colombia: ¿construyendo la paz?

Después de décadas de conflicto, ¿las inversiones de China en Colombia fomentarán el desarrollo sostenible luego del Acuerdo de Paz con las FARC?

El desarrollo de zonas rurales de Colombia forma una parte central del Acuerdo de Paz (imagen: Norway Ministry of Climate and Environment)

Network
for Social
Change

中拉对话
DIÁLOGO
CHINO

Prólogo:

El 24 de noviembre de 2016, el gobierno de Colombia firmó un acuerdo de paz con el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), inaugurando un nuevo capítulo después de casi 60 años de conflicto civil. Pero a raíz del conflicto, problemas no resueltos como la tenencia de la tierra y el desplazamiento, si no son abordados, se corre el riesgo de desestabilizar la paz. A medida que China comienza a comprometerse con Colombia, rica en recursos, ¿sus inversiones ayudarán o socavarán el desarrollo sostenible?

A medida que avanzaban las negociaciones con las FARC, el gobierno colombiano ha proclamado a la era del post Acuerdo de Paz como una de las múltiples oportunidades para los operadores extranjeros e inversores para estimular la actividad económica en áreas del país devastadas por la guerra y anteriormente inaccesibles.

En otras partes de América Latina, China se ha convertido en un nuevo socio comercial importante, fuente de préstamos y contratistas para proyectos de infraestructura. Los recursos de la región (soja, cobre, mineral de hierro y petróleo) contribuyeron al impulsar el rápido crecimiento de China y a la satisfacción de sus necesidades de seguridad alimentaria y energética. Además, durante casi una década, la alta demanda china impulsó a los productores latinoamericanos de commodities orientados a la exportación.

Pero los riesgos sociales y ambientales endémicos al rápido crecimiento en la extracción de recursos y, más recientemente, la construcción de infraestructura, han generado una fuerte oposición de las comunidades afectadas cuando los proyectos no fueron gestionados de manera responsable. En países como Ecuador y Perú, los proyectos chinos vinculados a metales y minerales desencadenaron una violenta resistencia, y en algunos casos fatal.

En el primer aniversario de la firma del histórico Acuerdo de Paz, formalmente votado como ley luego de que el gobierno del presidente Manuel Santos lo impulsara a través de un congreso dividido una semana después, la violencia todavía azota muchas áreas de la Colombia rural.

Las FARC pueden haber dejado sus armas, pero el final de la guerra más larga del hemisferio occidental ha abierto la puerta a nuevos conflictos sobre la propiedad de la tierra y los recursos naturales. Mientras tanto, el crecimiento se está desacelerando en China, trayendo consigo el nuevo desafío de la disminución de la demanda de las commodities de América Latina, donde las economías poco diversificadas han dependido de las necesidades de las materias primas chinas.

Dado este conjunto único de circunstancias, y en vísperas del primer aniversario de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, presentamos una serie especial de artículos que exploran los desafíos de China en la promoción del desarrollo pacífico y sostenible en un contexto altamente sensible y volátil como es de una Colombia posconflicto.

Desde Cartagena, en la costa caribeña de Colombia, Fabíola Ortiz informa sobre la importancia de salvaguardar la rica biodiversidad del país ante los proyectos de desarrollo por parte de China. Zhang Chun entrevista a la abogada pionera litigante Zhang Jingjing, quien utiliza casos legales para fortalecer la capacidad de la sociedad civil con el fin de garantizar el cumplimiento de las leyes de medioambiente locales de las empresas chinas que operan en el exterior. La experta en energías renovables Marcela Jaramillo sostiene que Colombia puede beneficiarse del rol de China como un país líder en el mundo tanto en la fabricación como en la provisión de paneles solares para reducir la pobreza energética en la zona rural de Colombia. Robert Soutar explica la oposición social a las industrias extractivas en Colombia y los nuevos riesgos operacionales para los inversores extranjeros que tienen los ojos puestos en este sector. Mariana Palau cuestiona los beneficios locales del desarrollo respaldado por los chinos en la ciudad portuaria de Buenaventura, un sitio afectado por una situación de pobreza crónica y en permanente conflicto, ubicada en la costa pacífica colombiana. Como parte de un exclusivo programa de periodismo conjunto, Andrés Bermúdez Liévano y Ma Tianjie ofrecen perspectivas colombianas y chinas sobre un controvertido proyecto petrolero perteneciente a la empresa china Sinochem en el antiguo bastión de las FARC de Caquetá, en los márgenes del Amazonas.

En el marco de esta coyuntura histórica, la naciente asociación entre China y Colombia cuenta con la oportunidad de abrazar un desarrollo

económico sostenible que evite los conflictos estimulados por los proyectos chinos en otras partes de la región, un modelo de desarrollo en el que las comunidades más afectadas por el legado de violencia de Colombia podrían formar parte.

Los artículos que forman parte de esta serie ofrecen una radiografía sobre la crítica relación entre China y Colombia y una visión oportuna de su potencial para lograr un desarrollo pacífico y sostenible para un país y sus habitantes profundamente afectados por el conflicto.

Isabel Hilton *es fundadora y editora de chinadialogue.net y Diálogo Chino.*

ÍNDICE

Prólogo <i>Isabel Hilton</i>	1
Capital chino viene a realizar la reconstrucción de Colombia <i>Fabíola Ortiz</i>	5
China necesita una supervisión urgente sobre sus inversiones <i>Zhang Chun</i>	11
La tecnología limpia puede ayudar a la construcción de la paz en Colombia <i>Marcela Jaramillo</i>	24
La oposición a las industrias extractivas en Colombia alcanza “su máximo histórico” <i>Robert Soutar</i>	28
China analiza ampliación de puerto en Colombia <i>Mariana Palau</i>	34
Sinochem se queda sin ‘licencia social’ para sacar petróleo en Colombia <i>Andrés Bermúdez Liévano</i>	39
Compañías petroleras chinas enfrentan problemas en la Amazonía <i>Ma Tianjie</i>	52



La intervención de Luis Gilberto Murillo, ministro de ambiente y desarrollo sostenible de Colombia, en el Congreso Internacional de Biología de la Conservación (imagen: Fabíola Ortiz)

Fabíola Ortiz

Capital chino viene a realizar la reconstrucción de Colombia

Colombianos quieren que China siga las normas ambientales del país asiático

“Tenemos que hacer las paces con la naturaleza,” afirmó Luis Murillo, ministro del medio ambiente y desarrollo sostenible de Colombia, frente a una audiencia de casi 2000 científicos que desembarcaron en Cartagena, para participar del Congreso Internacional de Biología de la Conservación (ICCB 2017). La audiencia ante la cual el Ministro hizo su alocución estaba compuesta por investigadores de diversos países, expertos en estudios de biodiversidad.

El ICCB es un foro mundial cuyo objetivo es discutir los desafíos de la preservación del medio ambiente y presentar nuevas investigaciones y tendencias

del mundo científico. No por casualidad, la ciudad elegida para albergar la 28va edición del Congreso fue Cartagena, habiendo sido celebrado previamente en Nueva York, Sídney y Beijing. El país atraviesa un momento histórico luego de más de cinco décadas de conflicto armado y a casi cinco años de negociaciones con las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC), uno de los grupos guerrilleros que dejaron una estela de 220.000 muertos, 60.000 desaparecidos y siete millones de desplazados.

“La naturaleza fue una víctima silenciosa del conflicto y, para restaurar estos ecosistemas, necesitamos investigación. La paz nos permitirá movilizar recursos para promover el desarrollo”, anunció el Ministro en la noche de la inauguración. “Los acuerdos con las FARC tenían importantes implicaciones para la conservación”, destacó ante los reporteros. “El proceso de paz nos ha permitido llegar a una zona de gran riqueza en biodiversidad que antes no conocíamos”. Y es en este sentido donde hay grandes riesgos, advierten los investigadores.

“Los grupos guerrilleros ocupaban muchas zonas, tenían el control territorial y ejercían la autoridad sobre la agricultura y actividades ilegales. Cuando salieron de estos territorios, el Estado no pudo ocupar las áreas en forma inmediata, lo que generó un vacío de gobernabilidad. Hemos observado que creció la deforestación y el cultivo de la coca se ha duplicado en los últimos cinco años en áreas que anteriormente se encontraban bajo el dominio de las FARC”, dijo a Diálogo Chino Thomas Walschburger, director científico de la organización The Nature Conservancy.

Oportunidades post-acuerdo

Existe la posibilidad de que la Colombia post-acuerdo sea un país de oportunidades para los inversionistas extranjeros, que están ávidos para penetrar y explotar los recursos naturales que estuvieron blindados durante décadas, cree la bióloga Brigitte Baptiste, directora del Instituto de Investigación

“

Nadie tiene una versión innovadora del desarrollo que incorpore el potencial de la biodiversidad al futuro del país,”

Brigitte Baptiste

directora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt

de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. La institución público-privada, con sede en Bogotá, se dedica a llevar a cabo investigaciones científicas para apoyar la formulación de políticas públicas en el país.

“El gobierno ha dejado claro que esta es una oportunidad importante. Habrá un proceso de mejora de las actividades petroleras, energéticas y de desarrollo agro-industrial. Pero nadie tiene una versión innovadora que incorpore el potencial de la biodiversidad al futuro del país. Carecen de una visión conservacionista para asegurarle un nuevo lugar a la biodiversidad”, digo.

Los acuerdos de negociación de paz le aplicaron una inyección de ánimo a los emprendedores, como ya había declarado en mayo de este año el embajador chino Li Nianping en Colombia. Se estima que se harían inversiones por un valor US\$10 mil millones en los próximos años.

China se ha consolidado como el segundo socio comercial de Colombia y ahora está interesada en participar en la reconstrucción del país durante el post-acuerdo. En marzo, la agencia para la promoción del turismo y la inversión extranjera ProColombia realizó en Beijing un foro, en un intento por abrir puertas y darle un nuevo impulso al desarrollo económico, colocando el foco en áreas de infraestructura, energía, agro-industria y turismo. En el año 2015, sólo había 20 empresas chinas en Colombia, ahora este número aumentó a 70.

Pensando en facilitar la entrada de capital chino, el gobierno de Colombia ha bajado los impuestos, según informó a la prensa Alejandro Valencia, director de ProColombia, durante el viaje de negocios, en Beijing. La protección del medio ambiente y el impulso a la investigación también se encuentran entre los objetivos que el gobierno colombiano pretende estimular con recursos extranjeros.

Para Baptiste, la inversión extranjera es bienvenida, “ya sea desde China o de cualquier otro lugar”. Sin embargo, espera que Colombia sea capaz de elegir las inversiones que posean medidas de seguridad, controles de calidad y una “preocupación ambiental evidente y un compromiso global”.

Lamentablemente, según la bióloga, “no es el caso de muchas agencias de cooperación chinas”. Baptiste argumenta que las empresas chinas están ganando “espacio político con su afán y capital, pero no están muy interesadas en la cuestión ambiental”.

Según evalúa, es necesario tener una idea clara sobre el nivel de inversiones que dichas empresas están dispuestas a hacer para realizar una buena gestión de la biodiversidad. “Si Colombia reduce sus estándares, sin duda tendremos inversiones de mala calidad y que pondrán en peligro el futuro del país. Los negocios con China tienen que pasar por un filtro importante”.

Según la opinión de la bióloga, sí es posible tener a los chinos como aliados de la conservación del medio ambiente, especialmente de parte del mundo científico. “La gestión ambiental de China es muy innovadora y de la mejor calidad. Les pediríamos que aplique aquí el mismo estándar que utiliza en su país”.

Los chinos como aliados

Al ser consultado por Diálogo Chino, el Ministro Luis Murillo afirmó que hay “muchas oportunidades de inversiones amigables para con el medio ambiente”. Un ejemplo de estas son las vastas áreas que se utilizan para la agricultura y ganadería, con superficies que van de 25 a 30 millones de hectáreas, que se pueden convertir en bosques. “Es un tema en el cual China podría estar interesada. Todavía podemos tener una cadena de producción de alimentos sin deforestación en Colombia en la cual se creen empleos para las comunidades e inclusive alianzas estratégicas entre el gobierno, el sector privado y las comunidades”, declaró el jefe de la cartera de medio ambiente y desarrollo sostenible.

“En 2010 teníamos 13 millones de hectáreas en 59 áreas protegidas. Nuestro objetivo es duplicar a 26 millones de hectáreas protegidas en los próximos años”, anunció. Murillo también espera que China tenga interés en invertir en el mercado de créditos de carbono.

El país recientemente creó un impuesto al carbono (el “carbon taxing”) y pagos por servicios ecosistémico. Con estos fondos se espera invertir en

proyectos locales para la conservación del medio ambiente, según informó el ministro. Se espera recaudar alrededor de 7 mil millones pesos colombianos al año, aproximadamente US\$2.3 millones, según proyecciones del Departamento Nacional de Planificación de la Presidencia.

“Además, la semana que viene presentaremos un proyecto de ley para el cambio climático para crear un mercado de carbono en Colombia. La idea es recibir aportes del sector privado internacional”.

La autoridad ambiental colombiana también afirmó que el gobierno actualmente optó por congelar todas las solicitudes de extracción de minería y petróleo. “Yo fui el que propuso congelar cualquier solicitud de minas y petróleo en la cuenca del Amazonas. Estas actividades están prohibidas en las áreas protegidas. Algunas de las áreas que demarcamos, tales como el Parque de los Nevados y páramos del área de Tolima, son las zonas más atractivas para las empresas de minería, y también zonas del Pacífico que necesitan que exista una prohibición para el ejercicio de la minería. Consideramos que la extracción de minerales puede llevarse a cabo de forma sostenible y responsable, pero este tipo de actividad atrae la colonización y la expansión de la frontera agrícola. No podemos luchar contra esto ahora si la explotación de estas áreas no es congelada”.

Promesas en medio de obstáculos

El discurso del Ministro suena ambientalmente prometedor a ojos internacionales. Sin embargo, hay señales de que las ambiciones anunciadas con tanto énfasis por las autoridades vienen enfrentando una serie de obstáculos y ataques.

La tasa de deforestación de Colombia se disparó en un 44% en 2016 en comparación con el año anterior, anunció a principios de julio el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). El año pasado 178.597 hectáreas de bosques fueron arrasadas. La situación es peor en la Amazonía colombiana, donde un 34% de la deforestación registrada en 2016 se concentró en los Estados de Putumayo, Caquetá, Meta y Guaviare. La ganadería extensiva, los cultivos de coca, la minería ilegal, incendios forestales e infraestructura de caminos han sido los principales impulsores de la deforestación.

En el año 2015, en la Conferencia del Clima de París, el gobierno colombiano se comprometió a reducir a cero la tasa bruta de la devastación de la Amazonía hasta el año 2020. Acompañando esta meta, anunciada a nivel mundial, países como Alemania, Reino Unido y Noruega declararon que invertirán US\$100 millones en forma gradual a medida que el país compruebe la reducción de la deforestación.

Las proyecciones se complicaron cuando, el último 22 de julio, el anteproyecto del presupuesto general de la nación para el año 2018 se filtró a la prensa colombiana. La expectativa es de que la cartera de medio ambiente experimente cortes por un 60% de su presupuesto, el cual pasaría de 632 mil millones pesos a 232 (US\$208 millones a 76 millones). El sector de parques nacionales sería el que más sufriría debido a dichos recortes, el IDEAM y el Instituto Humboldt, a los cuales se les cortaría un tercio de su presupuesto.

***Fabíola Ortiz** es una periodista freelance. Escribe sobre derechos humanos, la política, las relaciones internacionales, el desarrollo sostenible y temas sociales y de género .*



Trabajadores de la usina hidroeléctrica Coca-codo Sinclair en Ecuador, financiado por un banco chino (imagen: Agencia de Noticias Andes)

[Zhang Chun](#)

China necesita una supervisión urgente sobre sus inversiones

La abogada Zhang Jingjing asegura que lo que China necesita para su inversión en el extranjero son requisitos legales y no directrices.



Abogada ambiental Zhang Jingjing

Con la llegada de la iniciativa Una Franja, Una Ruta (OBOR, por sus siglas en inglés), el incremento de las inversiones chinas en el extranjero ha suscitado una mayor atención. Sólo en América Latina, China tiene inversiones directas por un valor de más de US\$110 mil millones, y en países como Brasil,

las inversiones de China se posicionan como las realizadas por los EE.UU. y España.

Sumado a esto, y debido a una débil conciencia ambiental y social, ha habido frecuentes fallas en la forma a través de la cual empresas chinas acuerdan con las comunidades en los países anfitriones. En los últimos años, varios organismos gubernamentales publicaron una serie de directrices sobre el desempeño ambiental y social de las inversiones en el extranjero, pero la imagen internacional de las empresas chinas no ha mejorado.

Zhang Jingjing, abogada ambientalista e investigadora visitante del Instituto de Derecho Ambiental en Washington DC, ha estado estudiando los riesgos ambientales y sociales asociados con las inversiones chinas en el extranjero desde el 2010. Durante el año pasado visitó proyectos respaldados por China en América Latina, África y Asia que han desencadenado conflictos sociales y ambientales con el fin de conocer las razones culturales, políticas y legales de la oposición; cómo la compañía y la comunidad se comunican; y cómo se resuelven estos conflictos.

Diálogo Chino hizo una entrevista con Zhang Jingjing en Beijing. Ella fue franca: el gobierno y los cuerpos legislativos de China en lugar de brindar información sobre mejores prácticas, deberían centrar su eje en la supervisión y la rendición de cuentas, estableciendo una línea de fondo clara para el desempeño de las empresas chinas que trabajan en el exterior. Con la llegada de la iniciativa Una Franja, Una Ruta, el incremento de las inversiones chinas en el extranjero ha suscitado una mayor atención. Sólo en América Latina, China tiene inversiones directas por un valor de más de US\$110 mil millones, y en países como Brasil, las inversiones de China se posicionan como las realizadas por EE.UU. y España.

Sumado a esto, y debido a una débil conciencia ambiental y social, ha habido frecuentes fallas en la forma a través de la cual empresas chinas acuerdan con las comunidades en los países anfitriones. En los últimos

años, varios organismos gubernamentales publicaron una serie de directrices sobre el desempeño ambiental y social de las inversiones en el extranjero, pero la imagen internacional de las empresas chinas no ha mejorado.

Zhang Jingjing ha estado estudiando los riesgos ambientales y sociales asociados con las inversiones chinas en el extranjero desde el 2010. Durante el año pasado visitó proyectos respaldados por China en América Latina, África y Asia que han desencadenado conflictos sociales y ambientales con el fin de conocer las razones culturales, políticas y legales de la oposición; cómo la compañía y la comunidad se comunican; y cómo se resuelven estos conflictos.

Diálogo Chino hizo una entrevista con Zhang Jingjing en Beijing. Ella fue franca: el gobierno y los cuerpos legislativos de China en lugar de brindar información sobre mejores prácticas, deberían centrar su eje en la supervisión y la rendición de cuentas, estableciendo una línea de fondo clara para el desempeño de las empresas chinas que trabajan en el exterior.

Diálogo Chino (DC): Usted ha estado investigando sobre los riesgos ambientales en torno a las inversiones extranjeras de China. ¿Qué has aprendido de este último año? ¿Cuál fue la visión de los actores locales que conoció, como abogada de intereses públicos de China?

Zhang Jingjing (ZJJ): Las inversiones de China en el extranjero han provocado muchos casos de daños al medio ambiente y derechos infringidos. Mientras tanto, las empresas chinas son muy malas en el manejo de las relaciones comunitarias en el exterior.

En mi investigación en América Latina, África y Asia durante este año, lo que más escuché en las comunidades afectadas y en las ONGs locales es que las empresas chinas no son transparentes y tienen muchas dificultades para comunicarse. Muchos grandes proyectos de extracción e infraestructura son inversiones conjuntas de empresas de varios países diferentes, pero cuando las cosas no funcionan, la opinión pública responsabiliza a China, ya que su imagen ambiental es débil y no saben comunicarse. He escuchado a menudo

que estas empresas no abordaban los problemas de la misma manera en que lo hacían las compañías locales. Frecuentemente, le decían a quienes realizaban los reclamos que se dirijan al gobierno, ya que era el gobierno el que los había convocado.

En el norte de Sierra Leona visité una mina de mineral de hierro de China. El socio del Reino Unido había fracasado, y así fue como la empresa china tuvo que comprar su parte, convirtiéndose en el único propietario del proyecto.

Cuando fui allí, acompañada por una ONG local, los niños de la aldea estaban entusiasmados y repetían una palabra una y otra vez. Les pregunté su significado y me dijeron que quería decir “blanca”: era la primera persona china que habían visto en sus vidas, por lo que me consideraban blanca.

Claramente, ningún miembro del personal chino en la mina había visitado jamás este pueblo cercano. Los aldeanos estas montañas nunca antes habían visto a una persona china. Más tarde, cuando nos reunimos con el jefe de distrito me dijo que, durante todo el proceso, desde la prospección hasta el inicio de la minería, sólo se había reunido con dos gerentes locales empleados por la firma china, pero nunca con un gerente chino.

No hay duda de que la minería afectó la vida local: tres pueblos cercanos fueron relocalizados, y el agua potable y de riego de aquellos sitios que no habían sido reubicados ha sido contaminada, además hay contaminación acústica a causa de la minería a cielo abierto. El río cerca del pueblo que visité, ubicado aguas abajo de la mina, tenía un color rojo oxidado; la contaminación era evidente. El jefe de distrito informó sobre la contaminación y los problemas de tierras a la empresa, en nombre de los lugareños, pero la respuesta fue que el proyecto había sido organizado por el gobierno de Sierra Leona

“ *Muchos grandes proyectos de extracción e infraestructura son inversiones conjuntas de varios países, pero cuando las cosas no funcionan, la opinión pública responsabiliza a China, ya que su imagen ambiental es débil*”

Zhang Jingjing

y que cualquier problema debía abordarse con el gobierno. Esta evasiva y la falta de comunicación fue una característica principal de esa disputa en particular.

En el 2002, una guerra civil de diez años terminó en Sierra Leona: el país todavía está en un proceso de reconstrucción, y la confirmación de la propiedad de la tierra todavía está en curso. En este caso, los temas vinculados a la tierra fueron resueltos mediante acuerdos verbales: reubicaciones, el origen de adquisición de la tierra, cómo se construyeron los edificios, todo fue de forma verbal. No hay documentación para especificar a quién pertenece la tierra. Hecho que genera un riesgo de conflicto entre la compañía minera y la comunidad.

Debido al brote de Ébola, la mina no ha estado en funcionamiento por mucho tiempo y la contaminación del agua y del suelo todavía no es grave. Pero esta es una mina a cielo abierto, y hay mucha lluvia en los trópicos: los metales pesados de la mina se lavan fácilmente en los ríos y el suelo. Si no se toman las medidas adecuadas para evitarlo, la expectativa es que la contaminación empeore y afecte la vida y la salud de los aldeanos, generando que el conflicto sea muy difícil de evitar.

DC: Colombia se ha convertido en un nuevo destino para la inversión china luego de la firma del Acuerdo de Paz entre las FARC y el gobierno colombiano. Pero las locaciones mineras en las cuales China está invirtiendo son a menudo remotas y es posible que se encuentren bajo el control de grupos armados. ¿Qué aprendió sobre la reducción del riesgo de conflicto y qué es lo podría aplicarse en este contexto puntual entre inversores y comunidades locales?

ZJJ: No he escuchado ningún buen ejemplo. Las directrices de responsabilidad social corporativa de la Cámara de Comercio de China para Importadores y Exportadores de Minerales, Metales y Productos Químicos (CCCCMC) podrían utilizarse como punto de referencia, pero puntualmente este es un estándar particularmente alto. Además, este parámetro está dirigido a la industria minera y no funcionaría para el área de infraestructura, por ejemplo. Tal vez podrían tomarse algunos de sus principios e implementarlos. Mucho más práctico sería aplicar

la comunicación sobre el derecho ambiental y laboral entre China y Colombia, introduciendo experiencias legislativas y de cumplimiento más avanzadas de China (como la Ley de Protección Ambiental, Capítulo 5, sobre la apertura de información y participación pública) a Colombia, como un canal de referencia dirigido a sus legisladores y órganos administrativos. Esto es algo que China ya está haciendo. Muchas ONGs chinas están (de acuerdo con esa sección de la ley) adquiriendo información ambiental, organizando audiencias y entablando demandas, y las comunidades e individuos chinos están usando este método para proteger sus derechos. Este es un mecanismo mucho más práctico, y algo que las firmas chinas pueden entender.

DC: ¿Tiene alguna recomendación para las empresas chinas que estén considerando invertir en Colombia?

ZJJ: Primero, deben tener un enfoque abierto, para ir y comunicarse con las comunidades y las personas afectadas, y con las ONGs locales. No sólo puedes comunicarte con el gobierno. Tienes que estar abierto. Muchos problemas se pueden resolver mediante la negociación, por ejemplo, ofreciendo un poco más de tierra (o dinero) o ayudando a la comunidad a mejorar sus edificios, construyendo buenos caminos, todos estos métodos son muy efectivos. A veces puede ser tan simple como reducir la contaminación por polvo.

Estudié dos casos en donde surgieron disputas sobre proyectos mineros, en los cuales los reclamos de los aldeanos eran en realidad muy simples: los camiones que transportaban el mineral eran enormes y el camino que la compañía había construido no era muy bueno, por lo que había mucho polvo y ruido cuando pasaban por el pueblo. Esta es una solución muy simple y no es necesario que surja una disputa en la cual la policía se involucre e incluso muchas personas resulten heridas o muertas. Pero en Perú existió un caso en el que un aldeano murió en un enfrentamiento de este tipo.

Si hay voluntad, la empresa puede resolver problemas bajo estas características. Considero que los gerentes chinos deberían darse cuenta de que no sólo es suficiente hablar con el gobierno, sino con los vecinos, los grupos ecologistas e incluso con los sindicatos. No puedes esconderte de los problemas.

DC: El Comité de Finanzas Verdes y varias asociaciones industriales relevantes para las inversiones en el extranjero han publicado recientemente una iniciativa sobre la gestión de estos riesgos ambientales. ¿Cuál es tu opinión sobre este proyecto? ¿Qué piensan las personas que conoces en los círculos de inversión sobre este tipo de documentos?

ZJJ: He visto una versión en inglés y, aunque ha sido redactada por diferentes organismos, los objetivos y efectos son similares a un documento redactado en 2015 sobre responsabilidad social en inversiones mineras de la CCCMC y la revisión realizada en julio de 2017 sobre sus directrices para la diligencia debida en las cadenas de suministro de minerales. Las intenciones son muy buenas, pero cuando se trata concretamente de su implementación no existe una legislación específica que garantice que realmente suceda.

De hecho, aquello que merece una mayor atención es que las empresas chinas en el exterior, las ONGs ambientales en las naciones anfitrionas, las comunidades y las personas en general malinterpretan la naturaleza de la ley y las políticas chinas sobre las inversiones en el extranjero.

Estas ONGs y comunidades a menudo discuten varios documentos: las Directrices de Préstamos Verdes de la Comisión Reguladora China del 2012; la Guía de Responsabilidad Social de la Asociación de Contratistas Internacionales de China del 2012 dirigida a contratistas chinos; las Directrices de Protección Ambiental del Ministerio de Comercio y del Ministerio de Protección del Medio Ambiente para Asociaciones de Inversiones en el Extranjero del 2013; y los dos documentos mencionados anteriormente de la CCCMC. Estas son todas las directrices de los órganos administrativos y las asociaciones de la industria que se aplican en lugar de leyes. Actualmente, no existe una ley única que supervise el impacto ambiental y social de las compañías chinas que trabajan en el extranjero, sólo se aplican regulaciones dispersas en torno a regulaciones administrativas y reglas ministeriales.

En mi investigación de este año descubrí que las ONGs y las comunidades de las naciones anfitrionas tienen una comprensión confusa de esto: no ven que estos documentos sean distintos a la ley china.

La CCCMC elaboró sus Directrices de Responsabilidad Social para la Inversión Minera China en el Extranjero e incluyó los principios de la guía de la ONU sobre derechos humanos para empresas y algunas otras buenas prácticas internacionales, tales como [Organizaciones Internacionales del Trabajo 'convención 169 sobre] "consentimiento libre, previo e informado". Estos estándares son muy altos. Si las empresas mineras chinas eligen usar este documento, entonces el conflicto con las comunidades locales se reduciría enormemente, se controlarían los riesgos ambientales, habría menos infracciones a los derechos laborales, y así sucesivamente.

Pero tal como están las cosas, esos elevados estándares son demasiado difíciles de implementar para la mayoría de las empresas chinas. Aunque ha habido grandes avances en la apertura de la información ambiental y la participación pública durante al menos diez años o más, y estos avances se han concretado en la Ley de Protección Ambiental, si se los compara con el Artículo 5 de esa ley sobre apertura de información y la participación pública en referencia a esas directrices, se encontrará diferencias importantes. Ocurre lo mismo si se comparan las pautas y la ley ambiental de las naciones anfitrionas.

Tanto la legislación china como la de la nación anfitriona establecen un estándar mínimo para la compañía. Las pautas representan algo más, una mejor práctica que la empresa puede optar por aplicar. Está señalando el camino, en vez de una solución inmediata, significa una dirección en la cual las empresas chinas deberían moverse.

En teoría, las directrices producidas por las asociaciones de la industria sólo se aplican a aquellas empresas que son miembros de esa asociación. Las empresas matrices de las compañías que invierten en el extranjero son miembros

“ *Algunas ONGs en el extranjero leen estas directrices y las consideran iguales a la ley china... Las directrices especifican que no son vinculantes, pero no han entendido la diferencia entre las directrices y la ley, ya que no entienden cómo funciona el sistema político y legal chino*”

Zhang Jingjing

de la CCCMC, pero las filiales en el extranjero, las empresas conjuntas, las empresas en las que participan o compran directamente y están registradas en la nación anfitriona, no son miembros. Esto significa una limitación de las directrices de la industria producidas por los órganos de membresía.

Cuando algunas ONGs en el extranjero leen estas directrices, las consideran iguales a la ley china, y creen que pueden usarlas para ejercer presión sobre las empresas. Las directrices especifican que no son vinculantes, pero como no han entendido la diferencia entre las directrices y la ley, ya que no entienden cómo funciona el sistema político y legal chino, las comunidades y las personas afectadas por el trabajo de la firma china consideran que este es un documento que la compañía china debe cumplir, y de no hacerlo, deberían responsabilizarse y rendir cuentas.

Algunas ONGs en el extranjero pidieron que se le diera mayor efectividad a estas pautas. Estas pautas son estándares para la responsabilidad social corporativa. Si quieres darle el nivel de efectividad para que se cumplan, dejaría de ser de responsabilidad social para convertirse en responsabilidad legal. La responsabilidad social corporativa es una tarea superior y voluntaria, una vez que una compañía ha hecho el mínimo legal.

DC: Entonces, las iniciativas y directrices en sí mismas no tienen fuerza obligatoria, eso proviene de la legislación. Usted mencionó que las regulaciones de China sobre el impacto ambiental y social de las compañías chinas en el extranjero están dispersas a través de regulaciones administrativas y reglas ministeriales y no hay una ley específica al respecto. ¿Podría explicar a qué tipo de supervisión están sujetas las inversiones de China en el extranjero en la actualidad?

ZJJ: A nivel local las empresas chinas están limitadas por la ley china, en el extranjero por la ley de la nación anfitriona. Además de eso, debes buscar acuerdos bilaterales de inversión.

Existe un cierto grado de supervisión de las inversiones y actividades comerciales en el extranjero, cuando se solicita la aprobación para enviar fondos al extranjero: la empresa debe obtener la aprobación del Ministerio de Comercio antes de poder recurrir a la Administración Estatal de Divisas

“

Estas pautas son estándares para la responsabilidad social corporativa. Si quieres darle el nivel de efectividad para que se cumplan, dejaría de ser de responsabilidad social para convertirse en responsabilidad legal.”

Zhang Jingjing

para Alianzas de Inversión en el Extranjero, la mayoría de los artículos usan un lenguaje que utiliza términos tales como “fomentar” e incluso si se usan palabras como “deberá” no existen consecuencias legales por incumplimiento.

¿Puede China, como exportador de capital, evitar la responsabilidad de supervisión? Hay que admitir que, en un mundo globalizado, la actividad de una empresa ya no se limita a las fronteras de un país. Uno de los autores de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, John Roggy de Harvard Kennedy School, señaló en un artículo escrito este año que bajo la globalización muchas multinacionales, como Apple y Alibaba, tienen más influencia económica que algunos pequeños países. Pero no existe un sistema legal único que rija las acciones ambientales de estos actores. Estas compañías tienen los mejores abogados y contadores, que pueden ayudarlos a capitalizar a su favor las áreas grises de la ley. Los diferentes países adoptan distintos enfoques legales sobre el mismo asunto, y las empresas usan esas brechas para maximizar sus beneficios. No hay diferencia entre las empresas con sede en China o aquellas como BP y Shell en la UE y EE.UU., cuando se trata de obtener beneficios.

Sin embargo, las multinacionales de la UE y EE.UU. están, en sus propios países, sujetas a un sistema legal más poderoso, y pueden ser demandadas

y poder transferir los fondos. Pero son principalmente las leyes de la nación anfitriona las que controlan los riesgos medioambientales y sociales de los proyectos con los inversores chinos.

Pero cuando se trata de riesgos medioambientales y sociales en el extranjero, el enfoque del gobierno chino es de orientación, en lugar de supervisión. Mencioné anteriormente documentos de política como las Pautas de Protección Ambiental

por ciudadanos y ONGs ambientales, por lo que se han visto forzados a desarrollar mecanismos para el manejo de los riesgos ambientales y las relaciones comunitarias. Mientras tanto, las empresas chinas no tienen una buena reputación medioambiental a nivel local y en el exterior son responsables de problemas medioambientales y evitan comunicarse con las comunidades y las ONGs, y fácilmente se convierten en el blanco de la ira del público.

Una gran economía responsable debería ejercer cierto grado de supervisión de la actividad comercial de sus empresas en el extranjero, y China no debería rehuir de eso. Es un estándar muy alto. Necesitamos persuadir a nuestro gobierno para que asuma esa responsabilidad. Es en interés de China, ya que es parte de nuestra imagen como una gran potencia; y es a favor del propio interés de las empresas, ya que reducirá la pérdida de activos a través de los riesgos y conflictos ambientales.

China es signataria del Pacto Internacional de las Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y tiene obligaciones en virtud del mismo. En julio, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dijo a los signatarios que cuando una empresa infringe los derechos económicos, sociales o culturales, las obligaciones de la nación de origen bajo el convenio no deben detenerse en las fronteras nacionales.

China también se ha comprometido con la acción mundial sobre el cambio climático. En Kenia y Mongolia, puede ver la feroz oposición de los pobladores locales y de las ONGs a las centrales eléctricas de carbón, financiadas por China, construidas por China y operadas por China. Las ONGs medioambientales locales ya han emprendido varias acciones legales contra estos proyectos. Si el gobierno chino no ejerce la supervisión sobre estas compañías, sus compromisos con el mundo se verán muy debilitados.

A partir de la reforma y apertura realizada durante siglo pasado, el gobierno ha alentado la inversión extranjera con la iniciativa Una franja, Una ruta que ahora motiva a las empresas chinas a trabajar en todo el mundo a una escala cada vez mayor. Pero si el gobierno no aporta supervisión, China no cumplirá los compromisos que ha contraído como nación soberana con la sociedad internacional.

Sin embargo, el gobierno ha indicado que está dispuesto a ejercer cierto grado de supervisión. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma solicitó un informe de opinión pública sobre un borrador de su Método para la Gestión de Inversiones de la Compañía y está elaborando una lista de sectores sensibles que requerirá procesos de aprobación adicionales para proyectos en el extranjero.

DC: Algunos observadores sostienen que los países de América Latina habrían reducido sus estándares ambientales para las empresas chinas, y deberían hacer cumplir mejor sus propias leyes. ¿Cuál es su punto de vista?

ZJJ: No creo que pueda afirmarse que lo hicieron exclusivamente por las compañías chinas, sino para todas las empresas extranjeras. No es difícil ver las causas, quieren más inversión. Pero las empresas chinas hacen lo que suelen hacer en su propio país, lo que obviamente es esforzarse por mantener buenas relaciones con los gobiernos locales, con la esperanza de que cuando surjan conflictos con las comunidades locales, el gobierno proteja sus intereses.

Algunas de las ONGs africanas y latinoamericanas defensoras del medioambiente y los derechos humanos con las que tuve la oportunidad de hablar aseguran que cuando las empresas chinas trabajan en sus países, tarde o temprano el soborno de funcionarios locales conduce a disputas territoriales, medioambientales y laborales. No tenían pruebas para respaldar esto, pero es algo que se escucha mucho.

La corrupción en las multinacionales es un problema común, en particular cuando están trabajando en países en desarrollo donde el estado de derecho es débil. EE.UU. usó la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero para controlar la corrupción en compañías vinculadas a EE.UU. para reducir la probabilidad de corrupción en la negociación. China todavía no tiene una ley específica como esa, sólo posee un delito inscripto en la Ley Criminal, Artículo 164: soborno de un funcionario extranjero u oficial de una organización internacional. Hasta el momento no se ha producido ningún procesamiento legal por ese delito.

El desempeño de las empresas chinas en materia de medio ambiente, trabajo y transparencia está determinado principalmente por el grado de supervisión legal de la nación anfitriona. En Canadá, EE. UU., Australia y Sudáfrica, las empresas chinas generalmente cumplen con las leyes, ya que el sistema legal es sólido y los grupos locales de derechos ambientales y medioambientales tienen muchos años de experiencia en emprender acciones legales contra los contaminadores. Y las empresas chinas están felices de trabajar en esos países, ya que hay menos riesgos.

DC: ¿Y tienes alguna recomendación para las ONGs en el extranjero?

ZJJ: Deben aprender un poco más acerca de las características de la acción de la sociedad civil en China. Los países africanos y latinoamericanos son democráticos y tienen elecciones, y ese es el contexto en el cual sus ONGs están acostumbradas a trabajar. Pero China tiene un sistema político completamente diferente, y el movimiento ecologista aquí ha sido tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba, usando el poder del gobierno. Por ejemplo, durante las operaciones medioambientales, muchas ONGs trabajaron junto a las autoridades ambientales. Las ONGs extranjeras que comprenden esto pueden elegir métodos apropiados y socios chinos. Por supuesto, actualmente no hay muchas ONGs ambientales o laborales chinas para elegir. Las ONGs locales de China aún sobreviven a pesar de todo, no hay muchas que cuenten con la visión y la capacidad para analizar las circunstancias por fuera de las fronteras de China.

Zhang Chun es investigadora mayor en la sede de chinadialogue en Beijing.



China puede ayudar con energía limpia en zonas rurales
(imagen: CasadeNariño)

Marcela Jaramillo

La tecnología limpia puede ayudar a la construcción de la paz en Colombia

La inversión china en energías renovables puede mejorar el acceso a la energía en las zonas rurales afectadas por el conflicto

Colombia se encuentra en encrucijada emocionante. Sus recientes pasos para poner fin a décadas de conflicto, han coincidido con el principio del fin de la era de los combustibles fósiles. Este cambio trae consigo oportunidades, y China puede convertirse en un socio clave en una nueva era en el desarrollo pacífico y sostenible para el país.

El histórico proceso de paz en Colombia con el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tuvo algunos importantes avances en el

mes agosto, incluyendo el lanzamiento de su nuevo partido político, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Un avance que marcó la integración de las FARC al sistema democrático y estableció una nueva fase fundamental en la transición hacia una nueva era posconflicto, después de la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016.

Pero si el objetivo del Acuerdo es sentar las bases para la obtención de una paz fuerte y duradera, debe hacerse justicia y reparar el daño a favor de las víctimas, integrar a los 7.000 ex guerrilleros a la vida cívica, fortalecer la seguridad y la capacidad institucional en todo el país, y reinsertar a la economía colombiana el territorio rural anteriormente controlado por las FARC.

Oportunidades en la era posconflicto

Las áreas rurales serán el centro de atención en la fase posconflicto en Colombia. El gobierno estima que se necesitarán unos US\$ 43 mil millones de inversión para implementar el Acuerdo de Paz en los próximos 15 años. El 85% se destinará a las reformas rurales, como la formalización de la tenencia de la tierra, la estimulación de la actividad económica y la mejora de la producción y el comercio de bienes, así como a la reducción de los altos niveles de pobreza en estas regiones.

El Departamento Nacional de Planificación sostiene que el acuerdo de paz podría ayudar a Colombia a expandir su sector turístico y convertir al país en un líder mundial en la producción de alimentos. Se espera que la inversión extranjera se triplique, especialmente en agricultura, infraestructura, turismo y otros servicios.

Esto será un factor de vital importancia para fomentar la transferencia de tecnología y la innovación, ayudar al incremento de la productividad y para la generación de un desarrollo económico cada vez más eficiente. Pero también puede provocar impactos negativos en las comunidades rurales, causando



400,000

Colombianos carecen de acceso a la energía en las zonas afectadas por conflicto

fricción ante el acceso a los recursos naturales, como el agua y la tierra, y a la expansión de la deforestación, dejando a su paso más pobreza y desolación.

Las inversiones en la era posconflicto – sobre todo en las zonas rurales afectadas – deberán mantenerse en un cuidadoso equilibrio con el fin de proteger la alta biodiversidad de las áreas que comprenden el 42% de los bosques colombianos y el 50% de los parques naturales nacionales. Este maravilloso capital natural actualmente se encuentra amenazado, sobre todo a causa de la deforestación relacionada a actividades como el cultivo de coca y la minería.

A medida que las nuevas inversiones extranjeras fluyen hacia estas regiones, deben aplicarse estándares de alta calidad que pongan su foco en la protección de las comunidades locales y los ecosistemas, a fin de evitar un retroceso en los esfuerzos de garantizar la estabilidad de la paz.

La creciente inversión global de China

Entre los distintos países que planean invertir en Colombia se encuentra China. Li Nianping, embajador de China en Colombia, recientemente expresó el interés de su país en ampliar sus inversiones en infraestructura y telecomunicaciones. En comparación con la mayoría de los países latinoamericanos, hoy la inversión china en Colombia es baja, pero está creciendo. China ya se convirtió en el segundo mayor socio comercial de Colombia después de EE.UU.. La mayor parte de la inversión es en agricultura, energía de carbón y petróleo (incluyendo Energía Esmeralda, propiedad de Sinochem en la Amazonia colombiana).

Un informe de la ONG colombiana Ambiente y Sociedad acerca de las inversiones chinas en Colombia indica que algunos de estos proyectos no cumplieron con los estándares técnicos y contractuales, además de generar conflictos ambientales y sociales. Más recientemente, en 2015, China también presentó un proyecto para desarrollar un parque industrial en Buenaventura – el mayor puerto de Colombia en el Pacífico -, así como proyectos agrícolas y de carreteras en las regiones de Orinoquia y Altillanura. Estas son las áreas claves identificadas para el desarrollo, ahora que el conflicto ha terminado y antes el acceso había sido limitado ante la presencia de las FARC.

Estas inversiones chinas podrían triplicarse en los próximos años. Esto significa que es esencial que el gobierno asegure una línea de base mínima para los estándares ambientales y sociales, pero que al mismo tiempo trascienda estos objetivos para exigir prácticas sostenibles de primera línea y la transferencia de tecnologías limpias. Este es un punto especialmente relevante si se trata de China. Este país es el mayor productor mundial de energía renovable y se prevé que instalará un tercio de la energía eólica, solar e hidroeléctrica a nivel mundial entre el 2015 y el 2021. China puede convertirse en un socio ideal para respaldar el desarrollo de tecnologías limpias en Colombia, incluso en sectores donde ambos países han expresado su interés de aumentar las inversiones, como en el sector agrícola.

Según el ministro de Minería y Energía de Colombia, más de 400.000 personas carecen de acceso a la energía en las zonas afectadas por un conflicto que prevaleció por más 60 años y muchos otros dependen de sucios y costosos generadores diésel. El acceso confiable y generalizado a la energía es clave para construir prosperidad y mejorar la calidad de vida.

Un desarrollo serio de las energías renovables en la Colombia posconflicto, tanto distribuido como conectado a la red, podría ayudar a construir un mercado. Colombia se está quedando atrás de sus competidores regionales latinoamericanos, tal como exhibió un estudio reciente de Bloomberg New Energy Finance (NEF).

Colombia tiene mucho para ganar en la transición de tecnologías limpias a nivel mundial al abrir nuevas fronteras después del Acuerdo de Paz. Para poder capitalizar la oportunidad de asumir futuro sostenible, es esencial que Colombia atraiga nuevas inversiones en esta área de países como China y establezca relaciones con nuevos socios internacionales en torno a altos estándares de sostenibilidad económica, social y ambiental.

Marcela Jaramillo es una experta colombiana en materia de energías renovables y cambio climático. Se especializa en enfoques políticos y financieros que impulsan la transición a una economía bajo en carbono.



Protesta contra el 'fracking' en el departamento de César, norte de Colombia (imagen: Esperanza Próxima)

[Robert Soutar](#)

La oposición a las industrias extractivas en Colombia alcanza “su máximo histórico”

Inversores consideran que se debería evaluar los riesgos socioambientales

A un año de la firma del histórico acuerdo con el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la paz sigue siendo ilusoria para muchos colombianos.

Las tensiones sobre la tierra y los recursos naturales persisten en las zonas rurales a pesar del fin del conflicto entre las FARC y el gobierno colombiano.

Esto se debe en parte, a que el gobierno continúa priorizando la extracción y la exportación de productos básicos como el petróleo, sin realizar una consulta adecuada con las comunidades afectadas, según asegura Camilo González Posso, director del Instituto de Estudios para la Paz y el Desarrollo de Colombia (INDEPAZ).

“El modelo económico ha ayudado a la reproducción de la violencia en los últimos 60 años”, dice.

Recientemente, González Posso aseguró públicamente en la Universidad Javeriana en Bogotá, capital de Colombia, que el conflicto persiste ya que el Estado permanece susceptible a ser capturado por intereses privados. El gobierno colombiano tiene la autoridad exclusiva para el otorgamiento de concesiones para proyectos de extracción a través de la Agencia Nacional de Minería (ANM).

Colombia está entrando ahora en una fase de “baja intensidad” en relación al conflicto, asegura González Posso. Si bien la frecuencia de los conflictos puede haber disminuido y los responsables de la violencia pueden haber cambiado, las comunidades rurales siguen sufriendo las consecuencias, añadió. En septiembre de este año, otro grupo guerrillero de izquierda, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), acordó un primer alto el fuego.

Desde los años cuarenta, Colombia ha experimentado conflictos civiles tan complejos como sangrientos entre las fuerzas de seguridad, tanto los grupos guerrilleros de izquierda como los paramilitares de derecha han dejado cientos de miles de muertos y millones de desplazados a nivel interno.

Conflicto de petróleo

El bloque petrolero de Nogal en el antiguo bastión de las Cañadas de las FARC constituye un ejemplo de los conflictos relacionados con los recursos que tienen lugar en todo el país, afirmó Joel Ross, analista latinoamericano de la consultora británica Verisk Maplecroft.

La perforación en el bloque de Nogal, propiedad de Emerald Energy, una filial británica del Sinochem de China, causará daños irreparables al agua y a los suelos

de los que dependen los sensibles ecosistemas amazónicos y las comunidades, advirtieron los opositores.

“La oposición social a los proyectos de extracción está alcanzando su máximo histórico en Colombia”, aseguró Ross. Además, le recomendó a los inversores que buscan un acuerdo post-paz en Colombia que lleven a cabo una evaluación “minuciosa y exhaustiva” de los posibles riesgos ambientales, sociales y políticos, que también incluyen la violencia asociada al narcotráfico y a la extracción ilegal de oro.

Participar en un diálogo temprano con las comunidades locales y comprender las preocupaciones y demandas de las comunidades ayudará a mitigar el riesgo de disturbios o de oposición social a los proyectos, agregó Ross.

Carlos Andrés Santiago, portavoz de la Corporación de Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas (CORDATEC), dijo: “Estamos avanzando en relación a los conflictos en defensa del agua, los recursos y el territorio”.

La organización, que se opone al fracking (producción de petróleo y gas de yacimientos no convencionales) en el departamento septentrional de César, exige un modelo de desarrollo alternativo que considere el principio del “buen vivir” y respete los derechos de la naturaleza.

Con la salida de las FARC, el mayor temor para algunas de las comunidades que viven alrededor de los sitios de los nuevos proyectos en desarrollo es lo que vendrá después, ya que la presencia del grupo armado proporcionó una forma de autoridad y control.

“No estamos cerrados a la inversión extranjera, no estamos en contra del desarrollo”, dijo Ernesto Ramírez Flores, de la Asociación de Consejos y Organizaciones Comunitarias del Bajo Atrato (ASCOBA), una cuenca densamente boscosa del departamento de Chocó, al noroeste de Colombia en la frontera con Panamá.

“Lo que estamos pidiendo es que la inversión sea conducente con nuestra cultura y nuestra visión, y sobre todo con los deseos y el permiso de nuestras comunidades”, añadió.

Ramírez aseguró que el estado ha tenido escasa presencia en la región y las comunidades coexistían con las FARC. Él destaca que las comunidades conservan el derecho legal a ser consultadas sobre los proyectos que se emplacen en su territorio.

Vanessa Torres, investigadora de la organización no gubernamental Ambiente y Sociedad, sostuvo que muchos proyectos en desarrollo se estancaron en Colombia a causa de la presencia de los guerrilleros. “No sólo es el petróleo, sino también la minería y la infraestructura”, dijo.

El Acuerdo de Paz con las FARC fijó nuevas normas para el desarrollo del territorio que anteriormente era controlado por este el grupo, incluyendo el rápido seguimiento de la aprobación de muchos proyectos. El gobierno colombiano asegura que este nuevo proceso facilita la llegada de la inversión extranjera.

“Tenemos un destino más atractivo para los negocios, para la llegada de más turistas a áreas del país que fueron aisladas por la guerra, y para captar inversores que quieran establecerse en el país”, dijo Felipe Jaramillo, presidente de la agencia de promoción comercial ProColombia, al periódico español El País.

Sin embargo, Torres asegura que los planes para otorgarle a la rama ejecutiva del gobierno un mayor poder de decisión sobre los nuevos proyectos, pasando alto a la legislatura, son peligrosos. Muchos de los proyectos requieren de análisis técnicos detallados para determinar cuáles serán sus impactos.

“Pasar por alto al Congreso no garantiza que se lleve a cabo un procedimiento de aprobación adecuado. Pero le da tiempo”, advirtió Torres, quien ha tenido acceso a algunos de los proyectos propuestos.

En mayo de este año, el Tribunal Constitucional de Colombia declaró inconstitucional una ley de 2016 encaminada a simplificar la aprobación de proyectos de desarrollo. El tribunal dictaminó que el Acta Legislativa por la Paz, conocida localmente como la Ley de Vía Rápida, amenazaba el principio democrático de separación de poderes.

La presencia china se intensifica

En mayo de 2015, el premier chino Li Keqiang viajó a Colombia en el primer viaje de un político de alto rango procedente de China en 35 años.

Poco antes de la visita de Li, ambos países firmaron un acuerdo de cooperación económica y técnica que le permitiría a China desembolsar fondos a Colombia para contribuir en el proceso de reordenamiento territorial en el período posterior al conflicto. Sin embargo, este tipo de acuerdo no contiene disposiciones sobre gestión social y ambiental.

Colombia representa una especie de anomalía para un país andino en términos de su relación con China, según sostiene Torres, que ha seguido de cerca la llegada de la inversión china al país.

A diferencia de Perú y Ecuador, la inversión ha llegado más lentamente debido a los largos y costosos procesos y acusaciones de las empresas chinas que acusaron al gobierno colombiano de haber favorecido a la competencia brasileña.

Con la gigante empresa de infraestructura brasileña Odebrecht vendiendo sus activos en Colombia, la presencia de China se está “intensificando”, señaló Torres, pero al mismo tiempo destacó que hasta ahora la inversión se concentró especialmente en hidrocarburos.

Wu Guoping, experto en América Latina de la Academia China de Ciencias Sociales, sostuvo que el petróleo es una fuente importante de ingresos para Colombia y que el interés de China en el petróleo de Colombia satisface las necesidades de ambos países.

Sin embargo, Wu aseguró que hace aproximadamente diez años, la embajada colombiana en Beijing intentó negociar con las compañías chinas para que invirtieran en su sector petrolero, pero con poco éxito. En ese momento, Colombia buscaba expandir el sector petrolero y desmitificar la percepción de que sólo era un exportador de café.

Hoy, Colombia necesita diversificar sus exportaciones a China para incluir productos como frutas, dijo Wu en el marco de una entrevista con la publicación

local de negocios Portafolio. Wu aseguró que la caída en el precio del petróleo impactó sobre el valor global del comercio entre China y Colombia, y que este último debe mirar a países como Chile y Perú, que le vende al mercado chino una mayor variedad de productos.

Pero con una oposición social tan fuerte, las industrias extractivas enfrentan mucho más que desafíos económicos en Colombia. Ross señaló que algunas autoridades locales están planeando obtener votos populares que podrían prohibir las actividades mineras en su jurisdicción. “Cualquier precedente jurídicamente vinculante sería catastrófico para el sector”, aseguró.

Robert Soutar es jefe de redacción de *Diálogo Chino*, radicado en Londres.



China invertirá en el puerto de Buenaventura en la costa pacífica de Colombia
(imagen: leonc27)

[Mariana Palau](#)

China analiza ampliación de puerto en Colombia

El puerto Buenaventura en el Pacífico debe ofrecer beneficios locales

Colombia es el único país de América del Sur con acceso a los océanos Pacífico y Atlántico. Sin embargo, el gobierno colombiano nunca ha aprovechado esta posición única para el impulso del desarrollo económico. Históricamente, el país ha favorecido a la infraestructura comercial a lo largo de la costa del Caribe, en ciudades como Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, ya que ofrecen una mayor facilidad en el acceso para sus socios comerciales más importantes como EE.UU. y Europa. Pero a medida que los mercados asiáticos crecen y Colombia comienza

a reconocer las oportunidades económicas asociadas, este desarrollo se ha trasladado hacia el Pacífico.

El proyecto estrella destinado a impulsar el desarrollo de la costa del Pacífico de Colombia es el Centro de Actividades Económicas de Buenaventura (CAEB). La promesa del CAEB se basa en el rápido crecimiento de ciudades como Shenzhen, en el sur de China. Su objetivo es capitalizar el dinamismo del Puerto de Buenaventura con el fin de estimular la actividad económica que beneficiaría a Colombia y a sus socios comerciales en el Pacífico. El Puerto de Buenaventura se ha convertido en el enlace más importante de Colombia con los mercados internacionales, generando el 27% (PDF Pag 6) de los ingresos totales aduaneros del país. El potencial del puerto para facilitar el comercio con sus socios latinoamericanos es enorme, dada su equidistancia entre México y Chile.

Sin embargo, hasta el momento el puerto se ha desarrollado por sí mismo, generando un escaso impacto económico en la ciudad de Buenaventura. “Buenaventura no es una ciudad portuaria, sino que es una ciudad que se encuentra al lado de un puerto”, dijo Julio Cesar Alonso, director del Centro de Investigación en Economía y Finanzas de la Universidad ICESI en Cali. Según Alonso, debido a su pobreza extrema y su bajo nivel de empleo e industria, las autoridades de Buenaventura poseen una baja recaudación de impuestos y el gobierno central tampoco ha invertido en la ciudad. En este marco, no ha podido desarrollar la infraestructura que las empresas relacionadas con los puertos necesitan para sobrevivir. Por lo tanto, la riqueza generada por el puerto se ha redirigido hacia otras ciudades con una mayor solidez en su infraestructura, como es el caso de Cali e incluso de la capital, Bogotá, a unos 500 kilómetros de distancia. “Cualquier inversión de desarrollo en la costa del Pacífico debe vincularse con una estrategia social”, aseguró Alonso, y agregó que este proyecto sólo podrá convertirse en un éxito para sus inversores si se erradica la pobreza.

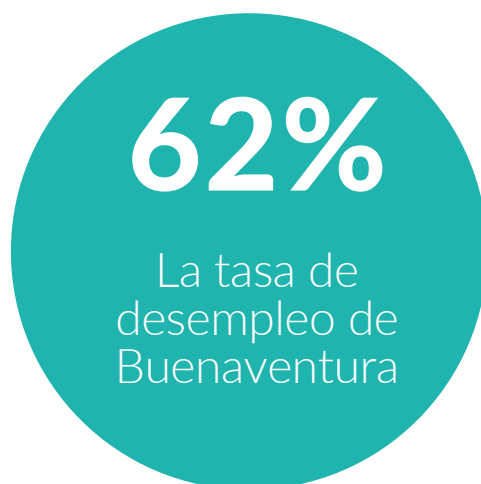
El CAEB es el remedio del Departamento Nacional de Planeación para el malestar económico crónico de Buenaventura. Es el proyecto piloto de su ambicioso Programa de Nuevas Ciudades, cuya meta es crear nuevos centros económicos en todo el país y generar crecimiento en la era posterior al conflicto. El objetivo del proyecto es sacar a miles de personas de la pobreza y posicionar a Buenaventura en el mapa mundial, asignando vastas áreas al desarrollo residencial, industrial, científico y tecnológico. La renovación de la infraestructura

para carreteras, agua y electricidad también es fundamental para el CAEB. Este modelo parecía lo suficientemente atractivo para que los gobiernos de China y Colombia firmaran un memorando de entendimiento en el cual China expresara su intención de invertir alrededor de US\$16 millones en el proyecto.

Alonso, dijo que, bajo el modelo propuesto, una empresa china dedicada a la fabricación de automóviles recibiría incentivos fiscales para establecer una planta de ensamblaje en Buenaventura. Además de crear empleo local, también se beneficiaría de los costos de envío más baratos de toda América. Al invertir en el CAEB, el gobierno chino podría crear una nueva plataforma de lanzamiento para las empresas chinas en Colombia y a lo largo de América del Sur.

A partir de ahora, el proyecto se encuentra en las etapas iniciales de planificación. Pero el gobierno colombiano lo considera lo suficientemente importante como para haber nombrado a su primer gerente, el nativo de Buenaventura, Didier Sinisterra. “Es una realidad que Buenaventura se encuentra años atrás en comparación con otras ciudades portuarias como Panamá”, dijo Sinisterra a Diálogo Chino vía telefónica desde Washington DC, desde donde regresará a Buenaventura para encabezar el proyecto. Mientras estuvo en Washington DC, Sinisterra tuvo la oportunidad de comparar su ciudad natal con otras ciudades durante la conferencia realizada este año en el marco de la Semana de las Ciudades Inteligentes. Él tiene una gran confianza en la capacidad que tiene este proyecto para transformar a Buenaventura. “A través de este proyecto, Buenaventura se convertirá en una ciudad de nivel mundial capaz de competir con otras ciudades como Singapur”, afirmó.

Sin embargo, hay problemas subyacentes en torno al proyecto. Una de los más apremiantes es la amenaza a la seguridad. Buenaventura ha estado sumida en la violencia asociada al conflicto de décadas que ha atravesado Colombia y que aún hoy persiste. La minería ilegal y el narcotráfico no han cesado desde



la histórica firma del Acuerdo de Paz con el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Además, los grupos armados ilegales, en su mayoría consisten en organizaciones paramilitares que no se han desmovilizado bajo el plan de desmovilización aplicado por el ex presidente Álvaro Uribe y están luchando para llenar el vacío de poder que las FARC han dejado vacante.

El CAEB exhibe la difícil situación de seguridad en Buenaventura con una posible resolución. La ciudad padece una tasa de desempleo del 62% y muchos habitantes de Buenaventura recurren a medios ilegales de supervivencia. A principios de este año, los residentes de Buenaventura expresaron su desesperación en una de las mayores protestas que Colombia ha vivido en los últimos años. Los manifestantes exigieron una mejora en la situación de seguridad, más empleos y un mayor acceso al agua potable. El gobierno los apaciguó prometiendo millones de dólares en la mejora de la educación, la salud y el acceso a la electricidad, así como la optimización de la infraestructura del agua. Algunos líderes de la protesta se oponen al CAEB y exigen que el gobierno primero centre su foco en aliviar las necesidades más acuciantes de la ciudad. En respuesta, el gobierno se ha comprometido a mejorar las condiciones básicas de vida, pero sugiere que el principal problema de Buenaventura es el desempleo. Algo que Sinisterra asegura que se abordará con mayor efectividad a partir de la realización del proyecto del CAEB. “El proyecto creará 150 compañías en 20 años y más de 60,000 empleos”, dice. “Esas cifras dejan en claro que este es un proyecto para la comunidad”.

Otro posible obstáculo para los inversores chinos es la complejidad en torno a la propiedad de la tierra donde se construirá el proyecto. La legislación colombiana reconoce los derechos de las minorías negras e indígenas, que suelen organizarse en consejos comunitarios, otorgándoles autoridad y derecho a la propiedad colectiva sobre los territorios que ocupan. Como el escenario de la gran diáspora africana sucedida en la época en la cual Colombia obtuvo la independencia a principios del siglo XIX, la costa pacífica se adapta a muchos de esos consejos. Aproximadamente el 70% de la tierra que el CAEB ocuparía es propiedad de dos de estos consejos, conocidos como Caucana y Gamboa.

Para que un proyecto como el CAEB se materialice, el gobierno primero debe consultar a los consejos que, tal como lo exige la ley colombiana, son dueños colectivos de la tierra. Los territorios ocupados por estos consejos se encuentran

todos en la zona rural de Colombia, que es notoriamente subdesarrollada en comparación con centros urbanos. Por lo tanto, las consultas generalmente se asemejan a una fase de negociación, en la cual los consejos presentan demandas como la construcción de escuelas y hospitales, en una etapa previa a que se otorgue la aprobación al proyecto. Sin embargo, el CAEB dirigirá sus acciones de una manera diferente. Será el primer proyecto de infraestructura en convertir a estos consejos comunitarios en socios comerciales, contribuyendo al desarrollo del proyecto.

Los concejos de Gamboa y Caucana ya aprobaron el proyecto, pero en marzo de 2017 un juez anuló los títulos de propiedad de la tierra de los consejos comunitarios, generando dudas sobre quién es el propietario de la tierra. Se ha iniciado un largo proceso de apelaciones, y se espera un dictamen final previsto aproximadamente para los próximos cinco años. Si los consejos pierden la apelación, aún tendrían el poder de negociar en un proceso de consulta, a pesar de que la tierra pasaría a ser propiedad del gobierno nacional.

Representantes de la Fundación para el Desarrollo Integral de la Región del Pacífico Colombiano, una ONG que trabaja por el desarrollo sostenible en la costa pacífica de Colombia, aseguró que el concepto sobre los consejos comunitarios y su derecho a la tierra que habitan ha sido muy difícil de explicar al gobierno chino. Temen que los inversores chinos sean disuadidos durante el tiempo que dure la resolución de este problema. Pero el gobierno colombiano está buscando una solución. Mientras se espera la decisión final, ha encargado un nuevo plan de zonificación de Buenaventura que gira en torno al desarrollo del CAEB. También le ha ordenado a la agencia de registro nacional que lleve a cabo una auditoría de los terrenos alrededor del proyecto y así llevar adelante un plan de factibilidad para ser presentado a los inversores extranjeros.

En mayo de este año, las delegaciones chinas visitaron el sitio del CAEB. Su evaluación de los costos y beneficios del proyecto podría determinar si ofrecerán una alternativa económica a las actividades ilegales y una oportunidad única para empoderar a las comunidades negras desfavorecidas en una región atravesada por los conflictos y la pobreza.

Mariana Palau es una periodista freelance, radicada en Colombia.



Luis Ortiz y Wilson Váquiro exhiben un letrero hecho por los niños de una escuela rural a raíz de un proyecto educativo sobre el mico bonito del Caquetá (imagen: Andrés Bermúdez Liévano)

[Andrés Bermúdez Liévano](#)

Sinochem se queda sin 'licencia social' para sacar petróleo en Colombia

Resistencia a un emblemático proyecto petrolero despertó un movimiento anti-extractivista nacional

Apenas mide tres metros de ancho, se eleva sobre una quebrada y conecta una destartalada carretera de una remota zona rural. Pero Puente Resistencia se ha convertido en el símbolo de la tensión entre la petrolera estatal china Sinochem y las comunidades locales del departamento de Caquetá, en el sur de Colombia, que se oponen rotundamente a su proyecto.

Tras tres años de malas relaciones con los campesinos de la región, la empresa Emerald Energy –la filial de Sinochem en Colombia– solicitó en abril de este año

una licencia ambiental para arrancar la exploración del bloque Nogal, situado en las puertas en la Amazonía y en una de las zonas medulares del postconflicto.

Sin embargo, el nivel de conflictividad social y ambiental en todo el departamento del Caquetá es tan alto que, así el Gobierno colombiano le dé el visto bueno al proyecto, parece muy probable que la petrolera china se quede definitivamente sin la 'licencia social' – la aprobación de compañías y sus proyectos por comunidades locales – y que incluso se recrudezcan los enfrentamientos.

Esa realidad es sintomática de la gran paradoja que enfrenta el gobierno de Juan Manuel Santos: necesita los recursos de la industria extractiva para financiar la implementación del Acuerdo de Paz. Pero al mismo tiempo, la movilización social que ha despertado desde su firma en noviembre de 2016 viene girando más y más en contra de este sector.

De un puente a un movimiento anti-petrolero regional

Durante dos meses de 2015, los campesinos del municipio de Valparaíso se apostaron en el pequeño puente y bloquearon el paso de los empleados de Emerald Energy hacia las veredas de La Florida y La Curvinata donde estaban haciendo estudios.

El bloqueo, que duró 58 días, terminó mal. La policía antimotines colombiana llegó para liberar la vía y, en medio de la negativa de las comunidades de dejarlo, los atacó con gases lacrimógenos. El resultado fueron 13 heridos, tres de ellos de gravedad. Uno de ellos estuvo hospitalizado tres semanas por una fisura en el cráneo.

Ese episodio tuvo un efecto dominó. Las comunidades locales en los pueblos vecinos de Valparaíso (11,000 habitantes) y Morelia (4,000 habitantes) comenzaron a organizarse. Crearon 'mesas de defensa del agua', donde se sentaron líderes y organizacionales sociales opuestos a la entrada de la petrolera.

Los viralizados videos del puente – que desde entonces quedó bautizado Puente Resistencia – fueron el germen para que en Florencia tomara forma un movimiento regional en contra de la industria extractiva, con el nacimiento de la Mesa Departamental por la Defensa del Agua y el Territorio donde hoy

convergen líderes campesinos, políticos, académicos, religiosos y empresarios. El tema subió puestos en la agenda pública del Caquetá, con marchas en defensa del agua convocando a miles de personas y mesas locales retoñando en casi todos los municipios del departamento.

¿Por qué escaló tanto el conflicto? ¿Qué fue lo que rebotó a las comunidades? Las historias son distintas en cada comunidad, pero los patrones se repiten. Todos acusan a Emerald de haber procedido con opacidad sobre sus planes e incluso con mentiras, respaldados por el argumento de que su proyecto es de interés público y prioritario para el Gobierno nacional.

“En 2014 estuvimos escuchándolos en la mal llamada ‘socialización’ [un proceso de internalizar en la planeación de un proyecto las normas de una comunidad], que sentimos como una imposición. Su mensaje era que tenían derecho sobre el subsuelo por tener el título, que nadie podía revertir eso y que no teníamos nada que hacer allí sino abrirles espacio,” cuenta José Antonio Saldarriaga, un espigado campesino de Valparaíso y uno de los líderes más visibles.

Dicen que, cuando en 2015 se reunieron con el entonces Ministro del Interior Juan Fernando Cristo, apareció un documento donde aparentemente ellos habían avalado el proyecto en una socialización, pero que – siempre según ellos – eran firmas de los refrigerios que habían recibido ese día. También que la empresa insistía en que no tenía tierra propia allí, cuando había comprado una parcela de 30 hectáreas en el sector de La Curvinata.

Cuentan que, una vez que la alcaldía de Valparaíso los citó para discutir un proyecto de vivienda, en realidad los esperaban la directora social de Emerald Lorena Cortés y la consultora ambiental Cyma para socializar la evaluación de impacto ambiental.



Rigoberto Valencia, uno de los líderes campesinos opuestos al proyecto de Sinochem, señala el puente en Valparaíso donde hicieron el bloque de 58 días en 2015 (imagen: Andrés Bermúdez Liévano)

Más llamativo aún es el caso que relata Herney Bermeo, un médico anesthesiólogo de Florencia cuya finca está en la vereda Yumal.

Después de que empleados de Emerald lo buscaran en el hospital donde trabaja para pedirle permiso para hacer estudios en su finca y que Bermeo les dijera que no estaba interesado en sus ofertas monetarias, funcionarios de la petrolera llegaron – según su narración – sin anunciarse a su finca y entraron a la fuerza, custodiados por el Ejército.

“Yo nunca les di permiso, ni les firmé nada. Un tiempo después me llamó el mayordomo y me cuenta que pusieron sus cuadrantes y estaban haciendo el estudio de sísmica. Yo incluso hablé con ellos por teléfono y me dijeron que tenían un permiso judicial. A mí nadie me notificó, ni vi el permiso. Puse un abogado y una demanda, para dejar un antecedente,” cuenta Bermeo, añadiendo que este año le apareció en su declaración de renta una consignación por 1,8 millones de pesos colombianos (US\$ 600) de la empresa que él nunca recibió y que sigue intentando rastrear.

“Ahí ve la arbitrariedad y el atropello de la compañía. Su único interés es hacer su estudio, independientemente de si usted da o no permiso. Están por encima de todos,” añade.

Diálogo Chino no pudo verificar estos episodios con otras fuentes, pero ilustran por qué se rompieron las relaciones entre Emerald y las comunidades. Tanto que, desde el bloqueo del puente, éstas prometieron no volver a reunirse con la empresa.

Sinochem declinó ser entrevistada sobre el proyecto y sobre sus relaciones con las comunidades. “Desafortunadamente en este momento no nos es posible aceptar su invitación. Quizás en el futuro podríamos hacerlo,” respondió por email Juanita Latorre, su coordinadora administrativa en Colombia.

Sin fórmula para el diálogo

Esas tensiones, que bajaron un poco al dejar Emerald de hacer presencia en las zonas rurales, están aumentando ahora a raíz de la solicitud de la petrolera de la licencia ambiental para explorar.

El 19 de abril, Emerald Energy solicitó a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) el permiso para construir 10 plataformas de pozos en los municipios de Valparaíso, Morelia y Milán, para poder explorar qué tanto petróleo hay. Su idea – según explica el resumen de su evaluación de impacto ambiental – es construir cinco pozos en cada plataforma, para hacer perforaciones entre 1 y 2 kilómetros de profundidad y entender qué aguas subterráneas hay.

Los campesinos de Valparaíso solicitaron a la ANLA una audiencia pública como parte del proceso de toma de decisión, que respaldaron con 700 firmas. La agencia nacional ambiental ya aprobó la audiencia y todos están pendientes de la fecha, que seguramente será en los próximos tres meses. Un proceso de licenciamiento en Colombia para un proyecto complejo puede demorar entre seis meses y un año.

La principal preocupación de las comunidades es el agua.

“Nosotros vivimos de la tierra. Somos ganaderos y agricultores, y para las dos se necesita agua. Eso es lo que nos da miedo,” dice Jesús Alfredo Gómez, un líder de la vereda de San Marcos en Morelia, que vive de sembrar plátano, yuca y caña.

Luis Eduardo Ortiz, un campesino de Valparaíso cuya finca está dentro del área solicitada en la licencia de exploración, dice: “Nunca se ha tenido información clara sobre los impactos posibles. Ellos solo hablaban de beneficios económicos, vías y escuelas. De manejo de aguas residuales solo vinieron a hablar dos años después cuando lo exigimos, pero aún no estamos tranquilos.”

Para ese día las comunidades tienen un plan para llevar un estudio ambiental propio, que sienten puede hacerle contrapeso al que presentó Sinochem a la ANLA.

“La idea era tener un estudio alternativo, científico y técnico, que se pueda equiparar a la evaluación de impacto de la empresa y que se pueda presentar a la ANLA, para ver si el de la empresa corresponde a la realidad o si hay vacíos,” dice Yolima Salazar, directora de la Vicaría del Sur, el brazo

social de la Iglesia Católica en Caquetá, que viene acompañando todo el proceso.

El estudio, que financió Caritas, la ONG de la Iglesia Católica alemana que ha apoyado varios proyectos de la Vicaría del Sur, lo realizó la Corporación Geoambiental Terrae bogotana que lidera Julio Fierro, un geólogo que ha trabajado en entidades públicas como el Ministerio de Ambiente, Parques Nacionales y la Contraloría General de la Nación.

La figura de Fierro seguramente generará aprensión en el sector petrolero, dado que en el pasado lideró los estudios muy críticos sobre minería que hizo la Contraloría General de la abogada Sandra Morelli y ha sido muy duro en sus escritos con la industria extractiva.

Un puesto central en el estudio alterno de las comunidades lo ocupa el mico bonito del Caquetá, un pequeño primate de pelo rojizo endémico a la región, que solo fue descubierto en 2010. Es tan raro que está catalogado como ‘en situación crítica’ (la más grave) por el libro rojo de especies de la conservacionista Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y fue incluido el año pasado en la lista de los 25 primates más amenazados del mundo por la Sociedad Internacional de Primatología.



El mico bonito del Caquetá, considerado uno de los 25 primates más amenazados del mundo, está presente en la zona del proyecto Nogal de Sinochem (imagen: Javier García).

“Esa lista es una deshonra. Son las especies más cercanas a extinguirse. Y, por lo tanto, debería ser una prioridad en el país evitar que se pierda,” dice el biólogo caqueteño Javier García, que enseña en la Universidad de la Amazonía y fue uno de los científicos que lo descubrió.

El mico habita solo en un pequeño triángulo demarcado por los ríos Caquetá, Orteguaza y tres riachuelos más pequeños conectados entre sí. La

esquina norte de ese triángulo, donde el río Pescado alimenta el Orteguzá, es justamente donde Emerald está solicitando la licencia y quiere construir los pozos.

Las comunidades sienten que la petrolera le está restando importancia a la especie, dado que su evaluación ambiental no menciona su grado de vulnerabilidad y habla de que su “condición debe ser verificada ya que durante el monitoreo de fauna del EIA no se confirmó su presencia”.

“En el plan de conservación de que es de 2016, la distribución de la especie incluye esa zona. En un EIA rápido quizás no lo logras ver, a menos que tengas mucha suerte, porque es muy difícil observar en campo. Pero es ruidoso y es fácil reconocer sus cantos. Con un estudio ambiental serio, ese ‘probablemente’ sería un ‘seguramente está presente’,” dice García.

Blanca Barragán, una campesina que vive al lado del puente de la discordia, dice: “No sé ellos, pero nosotros acá lo escuchamos en las mañanas.”

¿Té para tres?

La historia de las conflictivas relaciones entre Sinochem y las comunidades en la zona de influencia de su proyecto no es singular. Más bien, se ha vuelto recurrente en Colombia en los últimos cuatro años.

Los patrones básicos se repiten una y otra vez. Con Anglogold Ashanti en Tolima, con la petrolera estatal Ecopetrol en Meta y Casanare, con Eco Oro en Santander.

Las comunidades están – con o sin argumentos científicos sólidos – cada vez más preocupadas por los posibles daños ambientales, mientras tienen menos incentivos económicos. La reforma del sistema de regalías de 2011 reparte los recursos del sector extractivo en todo el país y no solo en los municipios donde se explotan. A su vez, las empresas y el Gobierno nacional desechan sus dudas como producto de la desinformación y se limitan a insistir, como discos rayados, en que manejan las últimas tecnologías y que los proyectos extractivos traen progreso.

Como no existe ningún espacio de diálogo donde las comunidades, las empresas y las autoridades puedan conversar como pares, al final nadie reconoce que esas preocupaciones son genuinas ni las aborda con los pobladores.

El resultado es que las empresas solo reaccionan cuando huelen que su inversión puede verse afectada por la oposición. El Gobierno solo aparece cuando hay que apagar un incendio. Y las comunidades quedan molestas por decisiones tomadas en escritorios a cientos de kilómetros de distancia. Como todo ocurre de manera reactiva, desescalar se vuelve casi imposible.

Avanza, el único programa de diálogo preventivo que ha sido política de gobierno, comenzó a funcionar en 2013, sentando a los tres actores en una misma mesa para abordar los problemas antes de que se convirtieran en una bola de nieve. Pero terminó cercenado cuando apenas despegaba en medio de un cambio de ministros, sin que siquiera se notificara a sus participantes.

Eso ha llevado a las comunidades a optar por estrategias más jurídicas y políticas.

Los pioneros fueron los habitantes de Piedras, un pueblo en el centro de

Colombia, que rescataron de la oscuridad un mecanismo de participación ciudadana llamado ‘consulta popular’ y llevaron a las urnas en 2013 la pregunta de si querían prohibir la minería. El 99% de la gente votó a favor del veto (2,971 a 24), dejando en la práctica sin licencia social a un proyecto de explotación de oro de la minera Anglogold Ashanti.

“El efecto dominó de la consulta de Piedras ya está en el resto del país y el año entrante será el de la primavera de las consultas populares,” anticipaba hace tres años Luis Carlos Hernández, un activista ambiental del Tolima.

Quizás se equivocó de año, pero no por mucho. En 2017 se han llevado a cabo siete consultas populares, con apabullantes ‘no’ a la minería y el petróleo de más del 95% de los votos. La Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) – el gremio del sector – tiene identificadas al menos 32 consultas más en camino.

Las empresas y el Gobierno nacional han intentado tumbar las votaciones sin éxito con el argumento de que no son legalmente vinculantes y que las comunidades locales no pueden decidir sobre el subsuelo. En Colombia los recursos naturales pertenecen a la Nación.

El Ministerio de Hacienda está instando ahora a la Registraduría Nacional a no convocar las votaciones ya aprobadas en El Doncello (Caquetá) y El Peñón, en el departamento de Santander, en el noreste del país, con argumentos presupuestales. En el gobierno de Santos entienden – como reconoció un ex ministro de Ambiente – que son “hechos políticos”.

Las comunidades, sin embargo, las ven como una manera de elevar el costo político de que su voluntad sea desconocida.

“El Gobierno dice que son ilegales. Pero nosotros vemos que estamos justamente aplicando la Constitución y las leyes. Como población y como municipio también somos Estado y también podemos tomar decisiones”, dice José Antonio Saldarriaga.

“Las alternativas jurídicas y técnicas, sin base social, no tendrían ninguna validez”, dice Yolima Salazar de la Vicaría del Sur.

El boom de las consultas en Caquetá

El sur de Caquetá no es la excepción. Allí vienen avanzando dos tipos de iniciativas de participación ciudadana en paralelo.

En Morelia están recogiendo firmas para convocar una consulta popular prohibiendo la actividad petrolera. Ya recogieron 670 firmas y las presentarán a la Registraduría cuando alcancen 1000 (para que la entidad valide las firmas correspondientes al 10% del censo electoral del municipio, o 376). Con ese aval, la pregunta de la consulta será evaluada por el Tribunal Superior del Caquetá – el órgano judicial a nivel departamental – y, finalmente, los morelianos irán a las urnas.

En simultánea, avanza otro mecanismo de participación que también busca prohibir la actividad extractiva, solo que con un proceso distinto llamado la

‘iniciativa popular normativa’, consistente en que los ciudadanos recogen firmas para presentar un proyecto legislativo a sus concejales municipales.

En Valparaíso le apostaron a una iniciativa popular normativa, pero ésta se cayó en 2016 por falta de apoyo de la alcaldesa anterior. Ahora no descartan recoger las firmas para convocar una consulta popular, aunque primero quieren ver qué sucede en la audiencia pública.

Este no es, sin embargo, un problema exclusivo a Sinochem: Ecopetrol y otras petroleras más pequeñas enfrentan inminentes consultas en El Paujil y El Doncello, ambas en Caquetá.

“Cada consulta parece David contra Goliat. Pero luego lo miras en todo el país. Hay tantas iniciativas y se pregunta uno, ¿por qué no hay un gran debate nacional sobre conflictos socio-ambientales? En el contexto después del Acuerdo de Paz, son los nuevos retos del país,” dice Florian Huber, que dirige la oficina en Colombia de la Fundación Heinrich Böll. Su think tank – cercano al Partido Verde alemán – financia espacios en donde las comunidades en procesos de consulta popular están compartiendo sus experiencias.

Dada su negativa a hablar del tema, es difícil saber si Sinochem es consciente de que la falta de licencia social le complica continuar. Pero sí hay indicios de que la empresa china ha reflexionado sobre el problema, como tuvo que hacer AngloGold Ashanti, con una fuerte – aunque quizás tardía – autocrítica después del conflicto en Piedras en 2013.

El 11 de septiembre, la Gobernación del Caquetá fue escenario de una curiosa reunión: Emerald llevó a dos técnicos del Instituto de la Conversación, una nueva ONG bogotana que busca resolver problemas sociales por medio del diálogo. Allí les hicieron preguntas como “si se hubiera socializado distinto, ¿cree que la comunidad habría aceptado el proyecto?” o “¿Qué recomienda para que el proceso mejore?”

La ausencia de un diálogo entre la empresa, las comunidades y el gobierno nacional ha impedido que los actores tengan una visión de gana-gana que cobije a los demás.

“Yo creo que, si se hubiera adoptado otra forma de socialización, que realmente lo hubiera sido, no habríamos llegado a extremos de casi perder vidas e incluso nos podrían haber convencido de algunas cosas,” dice Saldarriaga, cuya finca ganadera está en la zona de influencia de la licencia. “Pero al destajo es supremamente dañino. Se perdió la confianza y la armonía, que deberían ser el conducto regular.”

Eduardo Moya, el contralor departamental y uno de los funcionarios públicos de más alto rango a nivel regional, dice: “El Gobierno no ha tenido ninguna estructura para el diálogo en las regiones. Es como si el proceso de paz hubiera copado toda su capacidad de dialogar.”

Según el economista Jorge Reinol Pulecio, que fue secretario de educación del Caquetá y hoy lidera una oficina de temas de paz en la Universidad de la Amazonía: “Están viendo la paz como una oportunidad de reducir los costos de producción, dado que salen la guerrilla y el Ejército ya no tiene que proteger los proyectos. La leyeron como la oportunidad del negocio, sin pensar en lo que quieren las comunidades.”

¿Qué modelo para el Caquetá?

Caquetá tiene la tasa más alta de deforestación de Colombia y, por lo tanto, es crucial para cumplir el compromiso del país – en el marco del Acuerdo de París – de reducir a cero la deforestación neta en la Amazonía para el 2020. Es por eso que muchos caqueteños piden un debate especial sobre el futuro de su departamento.

“La Amazonía requiere unos estándares ambientales superiores y distintos al resto del país por su fragilidad. Ocurre un desequilibrio ecosistémico por cualquier motivo. Los de la ganadería son un ejemplo, pero son reversibles. En cambio, los del petróleo o la minería son irreversibles,” dice Mercedes Mejía de la Universidad de la Amazonía.



La carretera principal de Florencia a Valparaíso está en tan mal estado que los accidentes son comunes y los campesinos tienen enormes dificultades para sacar sus productos al mercado (imagen: Andrés Bermúdez Liévano)

Además, Caquetá fue una de las retaguardias históricas de las Farc y ha sido muy fuertemente golpeada por la guerra, que dejó 339,726 víctimas (o casi tres de cada cuatro caqueteños), según el registro nacional de la Unidad de Víctimas. Incluso Sinochem ha sentido los rigores del conflicto armado colombiano. En 2011, cuatro contratistas chinos estuvieron secuestrados por las Farc en un episodio que duró más de un año.

Aún hoy la región alberga algunos de los grupos de guerrilleros que no quisieron desarmarse con el resto de las Farc y que crearon sus propias disidencias. Con ellos regresaron, como confirman los campesinos de Valparaíso, las extorsiones a ganaderos y pequeños productores.

¿Qué opciones ven los campesinos y las comunidades locales?

Las opiniones divergen. Unos hablan de pasar de la ganadería más extensiva a modelos silvopastoriles, más productivos y ecológicos. Otros visionan piscicultura con especies como la cachama o cultivos de frutos amazónicos como el arazá, el copoazú y el cacao maraco, aunque –advierten– en el pasado han fracasado por falta de compradores. Unos más de ecoturismo, aunque aún hay poca infraestructura.

“La gente quiere cosas de largo aliento. ¿Cuál era la barrera nuestra? La guerra. Por eso, para nosotros es fundamental impulsar productos como el café y cacao con un sello amazónico, para volverlos pilares de la economía regional,” dice Eduardo Moya, quien fue presidente de la Cámara de Comercio de Florencia durante una década.

Para eso, sin embargo, la región necesita con urgencia una inversión estatal como la que esboza el Acuerdo de Paz. Su capítulo rural – que fue uno de los ejes en la negociación con las Farc – habla de la necesidad de llevar bienes y servicios públicos al campo, como electricidad, salud, educación y vías, para que puedan mejorar las condiciones de vida y las oportunidades de sus moradores.

“Tenemos muchas expectativas porque el acuerdo dice que las juntas de acción veredal vamos a ser las protagonistas del desarrollo en el campo. Quisiéramos ver eso como una realidad,” dice Luis Enrique Laguna, que representa a todas las juntas rurales de Morelia.

Ese es justamente el mensaje que les llevó el presidente Juan Manuel Santos a los campesinos de Morelia en julio de este año, cuando escogió ese pueblo para lanzar en todo el país los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (o PDET), que son los planes para priorizar y acelerar la inversión en las 16 regiones más azotadas por la violencia, la ausencia del Estado y la pobreza.

Ese es justamente el mensaje que les llevó el presidente Juan Manuel Santos a los campesinos de Morelia en julio de este año, cuando escogió ese pueblo para lanzar en todo el país los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (o PDET), que son los planes para priorizar y acelerar la inversión en las 16 regiones más azotadas por la violencia, la ausencia del Estado y la pobreza.

“Lo importante aquí es entender que este es un plan de desarrollo que por primera vez se va a hacer de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. No va a ser el director de Planeación, ni el ministro de Agricultura o el ministro de Hacienda o el Gobierno Nacional el que va a venir a Morelia a decirles: ‘aquí vamos a construir esta carretera y vamos a invertir la plata de esta forma’. No, ustedes nos van a decir a nosotros,” prometió Santos a los campesinos.

Esa ironía no se le escapó a quienes lo oyeron y están enfrascados en la pelea con Sinochem.

Como dice el líder Hernando Cuéllar; “vino, admiró la riqueza de la fauna y del pulmón del mundo, y habló de que nosotros planearemos el territorio. Pero cuando queremos discutir de petróleo, ahí sí nada.”

President Juan Manuel Santos brought precisely this message to Morelia’s farmers in July of this year when he chose the town to launch nationwide initiative Development Programmes with a Territorial Focus (PDET), which plans to prioritise and accelerate investment in the 16 regions most affected by violence, the absence of the State and poverty.

Andrés Bermúdez Liévano es un periodista freelance, radicado en Colombia. Escribe sobre la implementación del Acuerdo de Paz, medio ambiente y cambio climático.



El mono Caquetá titi en peligro de extinción (imagen: Javier García)

[Ma Tianjie](#)

Compañías petroleras chinas enfrentan problemas en la Amazonía

Petrolera china en Colombia está testeando la estrategia de recursos de China para América Latina

La cordillera de los Andes se emplaza a lo largo de la franja occidental de América del Sur como un cortaviento gigante. Tierra adentro, hacia el este, suaves llanuras dan paso a densos bosques y, finalmente, a la vasta selva amazónica. Una décima parte de las especies conocidas en el mundo viven aquí, y la respiración de cientos de millones de árboles hace conocida a esta área como uno de los “pulmones del mundo”.

En las laderas de los Andes en el extremo norte de la Amazonía colombiana se encuentra la pequeña ciudad fronteriza de Florencia. Florencia es la capital de la

provincia de Caquetá y constituye una de las puertas del país montañoso hacia la selva tropical. En la plaza central, las palmeras cercanas se yerguen contra un telón de fondo de montañas distantes.

El 8 de junio de 2011, cuatro hombres armados secuestraron a cuatro ingenieros chinos a 150 kilómetros al noroeste de esta área, en un lugar llamado San Vicente del Caguán, y los mantuvieron cautivos en las profundidades de las montañas. Los cuatro eran empleados de una empresa subcontratada llamada Emerald Energy, una subsidiaria del Grupo Sinochem de China. Los secuestradores eran miembros de las FARC, una organización guerrillera colombiana de extrema izquierda. Desde que comenzó la lucha armada contra el gobierno colombiano en 1964, las FARC han utilizado el secuestro y el tráfico de drogas como métodos de control del territorio que está por fuera del alcance del gobierno colombiano y así, intentaron alcanzar sus objetivos políticos que dicen representan a la población excluida. Las estadísticas establecieron que 220,000 colombianos han muerto y alrededor de 7.3 millones han sido desplazados durante un conflicto que perduró durante 52 años, una cifra muy alta para un país con una población de tan sólo 48 millones.

En el entonces bastión de las FARC en Caquetá, los trabajadores petroleros chinos se encontraron atrapados en un conflicto civil en un país extranjero. En noviembre de 2012, después de 17 meses de cautiverio, los cuatro trabajadores fueron liberados – no a causa de un pago de rescate o una audaz liberación, sino debido a un cambio político fundamental: En octubre de 2012, las FARC y el gobierno comenzaron las conversaciones históricas de paz, y la liberación de los rehenes extranjeros, que todavía permanecían secuestrados, fue un símbolo de buena fe.

Cuatro años más tarde, el país fue testigo de otro cambio histórico.

Una oportunidad histórica de paz – y de negocios

El 24 de noviembre de 2016, después de cuatro años de conversaciones, las dos partes alcanzaron un acuerdo general de paz luego de la oposición votada en un referéndum el mes anterior y la renegociación de un nuevo acuerdo con enmiendas significativas. Después de medio siglo de enfrentamientos, las FARC y el gobierno cesaron el fuego y Colombia entró en una era postconflicto, o al

menos posterior a la paz (post-acuerdo). Las FARC depusieron las armas y se convirtieron en un partido político legítimo. El 10 de diciembre, el presidente colombiano Juan Manuel Santos pronunció un conmovedor discurso en Oslo, Noruega, mientras aceptaba el Premio Nobel de la Paz.

Todavía hay mucha reconstrucción por hacer en Colombia. Reintegrar a los soldados de las FARC en una sociedad pacífica será un proceso difícil y todavía hay muchos problemas. Pero el proceso ya comenzó. Como dijo Santos en su discurso: “El tan esperado proceso de implementación ha comenzado, con el inestimable apoyo de las Naciones Unidas. Este acuerdo marca el comienzo del desmantelamiento de un ejército, esta vez un ejército irregular, y su conversión a un movimiento político legal. Con este nuevo acuerdo, el último conflicto armado más antiguo el hemisferio occidental ha terminado”.

La paz significa oportunidades muy reales para la élite política y empresarial de Colombia. Cuando comenzaron las conversaciones de paz en 2012, Santos se embarcó en un “espectáculo itinerante” por China, invitando a las empresas chinas a invertir en Colombia como parte de la estrategia de inversión extranjera de China en Shanghai. En la víspera del referéndum sobre el Acuerdo de Paz, el embajador de Colombia en China, Oscar Rueda García, dijo en una entrevista a la agencia de noticias Xinhua que los cambios positivos generados por el proceso de paz significarían más oportunidades de inversión y asociación para las empresas chinas, incluida la reconstrucción del conflicto y áreas rurales.



Recientemente, se ha erigido una escultura de la paloma de la paz en la Universidad de la Amazonia en Florencia. Imagen: Ma Tianjie

Las empresas chinas se mostraron cautelosamente optimistas sobre las mejoras en el clima de inversión de Colombia. Según el análisis de la Cámara de Comercio Internacional de China para el sector privado, la minería, los viajes y la agricultura estarían abiertos a la inversión, pero las empresas deberían desconfiar de los delitos violentos que llenan el vacío dejado por las FARC.

Disidencia en las montañas

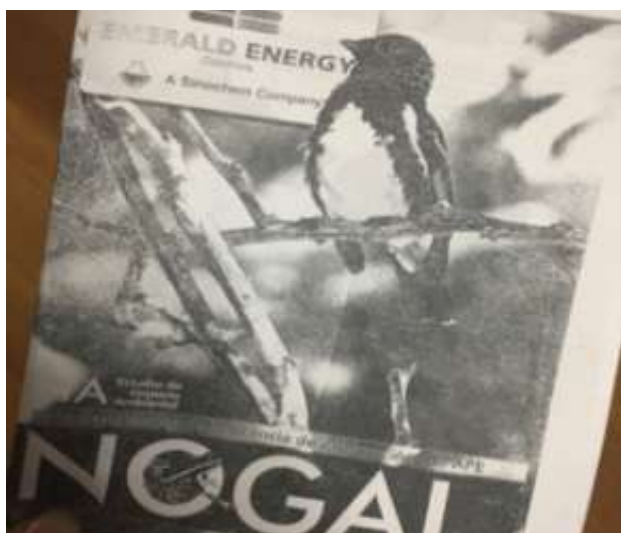
Después del trauma del secuestro, Sinochem finalmente tuvo la paz y la oportunidad que había estado esperando. La empresa ha sido testigo de cambios políticos, económicos y ambientales en Colombia: ha trabajado en el país desde el 2009, cuando compró la firma británica Emerald Energy, que poseía activos principalmente en Colombia y en Siria. La adquisición le otorgó a Sinochem varios campos petrolíferos en Colombia, convirtiendo al país en un proveedor confiable de petróleo para el grupo. Colombia es el tercer mayor productor de petróleo de Sudamérica, después de Venezuela y Brasil. En 2013, con la mejora de la situación de seguridad, Emerald Energy anunció la exploración de tres nuevos yacimientos petrolíferos en asociación con la compañía petrolera nacional. En el marco de este proyecto, se consideró que el bloque Nogal en Caquetá gozaba de un “bajo riesgo de prospección y un alto potencial de recursos”.

Pero el desarrollo en Nogal no ha recibido una bienvenida sincera ni en Florencia, ni tampoco en Caquetá de manera más amplia. El bloque de 240,000 hectáreas no está muy lejos del sur de la ciudad y se extiende sobre las regiones amazónicas de Morelia, Milán y Valparaíso. Antes haber comenzado la perforación de forma oficial, Emerald Energy necesita llevar a cabo la estratificación y las pruebas sísmicas en unas 20,000 hectáreas.

Hay un gran debate sobre el proyecto en el pueblo de Valparaíso. Se necesitan tres horas en un autobús rural y luego trasladarse en motocicleta sobre caminos llenos de baches para llegar hasta aquí. Las extensas y hermosas llanuras montañosas se encuentran atravesadas por parches de bosques prístinos, con ganado y caballos pastando tranquilamente. La pareja de agricultores Blanca Barragán y Simeón Cortés han construido aquí una simple casa de madera. En el frente, naranjas maduras cuelgan de los árboles, mientras que un loro azul zafiro descansa sobre las ramas. En la cocina, Blanca está preparando la cena y relatando el momento en cual resultó electrocutada por una raya de río mientras pescaba en el bosque.

El último sol de la tarde se filtra a través de las grietas de las paredes, iluminando las caras morenas de varios granjeros reunidos aquí.

“Somos agricultores, la industria petrolera no significará nada para nosotros”, dijo el joven Rigoberto Valencia, el más conversador del grupo. Le preocupa que las pruebas sísmicas afecten el suministro local de agua. El agricultor José Antonio Saldarriaga dijo que él cría en su granja más de 100 cabezas de ganado y también, plantas maíz, bananas y yuca. También hay un parche de bosque prístino, regado por un pequeño arroyo y un manantial. “La granja es nuestro único medio de vida”. Las aguas residuales y posibles fugas de la extracción de petróleo son una preocupación para los agricultores.



Informe de evaluación sobre impacto ambiental producido por Emerald Energy para prospección en Nogal. Imagen: Ma Tianjie

Emerald Energy no ha ignorado estas preocupaciones. En 2014, la empresa organizó una serie de reuniones en Caquetá para contarles a los representantes de la comunidad sobre el proyecto. La evaluación de impacto ambiental para la prospección en Nogal se completó a fines del año pasado. La evaluación analizó el impacto de este trabajo en el agua a nivel local, los bosques, la biodiversidad, la comunidad y la economía. La evaluación determinó que sólo habría “impactos negativos habituales” en la calidad del agua.

Pero las reuniones no fueron suficientes para convencer a los lugareños. “Se pareció más a una conferencia unilateral”, reclamó Saldarriaga. Los pobladores también cuestionan algunas de las conclusiones del informe, particularmente las relacionadas a uno de los animales en peligro de extinción de la zona, un mono llamado Caquetá titi (*Callicebus caquetensis*). El informe sostiene que: “Aunque hay datos que exhiben que el mono vive en esta región, no hubo signos de que lo hiciera durante el período de evaluación”. Los aldeanos piensan que esta conclusión podría haber sido deliberada. “¡Los escuchamos en los árboles de nuestras granjas!”, dijo Luis Eduardo Ortiz, abriendo la puerta y apuntando hacia el bosque. Javier García, un biólogo de la Universidad de la Amazonia y descubridor de esta especie de mono, dice que vive aquí, y que su distintiva llamada es muy fácil de identificar.

Aumentando la oposición

Los habitantes del pueblo han vivido durante mucho tiempo bajo la sombra del conflicto armado, y no sólo son las preocupaciones ambientales las que les generan desconfianza ante la industria petrolera. Antes de 2006, las FARC ocuparon los bosques en lo profundo de las montañas de Caquetá, y aparecieron milicias privadas (llamadas grupos paramilitares en Colombia) para combatir a la guerrilla. La lucha constante obligó a muchos aldeanos a abandonar el área.

La preocupación de los pobladores es que a partir de la llegada de las compañías petroleras se termine una paz largamente esperada y sumado a esto, la afluencia de dinero pueda generar un desastre. “Las milicias firmaron un acuerdo con el gobierno hace diez años y se desarmaron, pero no del todo. La tentación de todo ese dinero generado por el petróleo puede tentar a algunos a regresar al crimen organizado”, dijo Yolima Salazar, directora de la oficina de asuntos comunitarios de la Iglesia Católica en Morelia.

En junio de 2015, los preocupados pobladores de Valparaíso decidieron intensificar sus esfuerzos, bloqueando el único camino que comunica hacia uno de los puntos de prueba sísmica para evitar que la empresa realice su trabajo. Enviaron a la policía antidisturbios y utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a los aldeanos. Un aldeano, Juan Pablo Chávez, terminó ensangrentado después de haber sido atacado por una granada de gas lacrimógeno. Muchos otros resultaron heridos. La violencia había regresado a la aldea de montaña, aunque por diferentes razones.

Meditando en el Amazonas

Jorge Reinol Pulecio es el jefe de la “Oficina de Coordinación de la Paz” en la Universidad de la Amazonia. Su departamento tiene como objetivo brindarle a cada sección del Acuerdo de Paz el acceso a la educación y a la investigación para ayudar a encontrar un camino a seguir en este lugar devastado por el conflicto. Acerca de la controversia sobre Nogal, dijo: “El Acuerdo de Paz fue un momento decisivo. Uno de los reclamos de los aldeanos es el de tener derecho a ser escuchados [como] había prometido el Acuerdo de Paz; el otro es que el gobierno y las grandes empresas ven una oportunidad en la reducción de los costos”. Antes del alto el fuego, los costos de seguridad e incluso los rescates

eran parte de un mecanismo para hacer negocios en las áreas controladas por las FARC, dinero que las compañías ya no necesitan gastar.

Sinochem y la comunidad local pueden tener opiniones diferentes sobre cuán feroz es la oposición al proyecto Nogal. Como signataria de la iniciativa de sostenibilidad corporativa del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, Sinochem elaboró una lista de las empresas de bienestar público en la región en el marco de sus informes anuales de responsabilidad social corporativa, incluida la capacitación de apoyo en habilidades locales tradicionales de carpintería y la construcción de carreteras. Emerald Energy también ha realizado las reuniones habituales sobre el proyecto. En septiembre de este año, contrató un organismo externo, el Instituto para la Conversación, para hablar con representantes locales, ONG y académicos. Según el funcionario del gobierno regional de Caquetá, Carlos Ramírez, quien asistió a esas conversaciones, la compañía ha reconocido el problema que enfrenta ante la negativa de la opinión pública.



Wilson Vaquiro y Luis Eduardo Ortiz muestran la señal que sostenían cuando integraron la protesta por la actividad de prospección. La imagen exhibida en la pancarta es el un mono tití de Caquetá. Imagen: Ma Tianjie

Aunque los lugareños cuestionan de algunas de las acciones que Emerald Energy ha hecho durante la prospección, como comenzar su trabajo sin el permiso de los propietarios, es difícil confirmarlo.

Pero lo cierto es que existen divergencias subyacentes sobre cómo deben desarrollarse los bordes de la región del Amazonas, y este es un tema que genera oposición. Como dijo Jesús Alfredo Gómez de Morelia, tienen una oposición “fundamental” contra las compañías petroleras que trabajan aquí.

Mientras habla Gómez, Hernando Cuellar entró al patio detrás de nosotros y me regaló una fruta dorada y regordeta. “Se llama arazá, única en el Amazonas”. Me

la comí toda, hasta la piel – su pulpa era suave y dulce, y su sabor era similar al del mango”.

Aquí la calidad de la fruta es fantástica, pero no podemos transportarlos, por lo que se pudren en el suelo”, dijo, señalando una fruta caída en el suelo del patio.

Las familias de agricultores heredan su trabajo de generación en generación, y tienen sus propias ideas sobre cómo debe desarrollarse la región, ideas que son compartidas entre unos y otros. El contralor financiero de Catequá, Eduardo Moya, piensa que ante la “singularidad” de la región amazónica, el gobierno debería tratarla de manera distinta. Esa singularidad proviene de “un entorno más vulnerable” y “productos de alto valor agregado”, valor que nace de la preservación del medioambiente y de los métodos de producción sostenibles. “Café, coca, fruta e incluso peces de agua dulce, todos estos productos tienen potencial en los mercados internacionales”.



La fruta arazá, única en el Amazonas, representa las esperanzas de los lugareños. Imagen: Ma Tianjie

De regreso en la cabaña de madera en Valparaíso, le pregunté a Rigoberto qué otras oportunidades de desarrollo hay para Caquetá, si no es el petróleo. “Necesitamos la oportunidad de llevar nuestros productos al mercado, con buenos caminos y tecnología agrícola”. Señaló el camino de tierra que pasaba junto a la empresa. “¿Cómo se supone que compitamos con alguien más?”

En su discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz, el presidente Santos dijo: “Es muy reconfortante poder decir que el fin del conflicto en Colombia, el país con mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado en el mundo generará altos dividendos ambientales”.

Pero en Florencia muchos dudan sobre la preocupación del gobierno nacional por el medio ambiente. El apoyo a la extracción de petróleo en el Amazonas ha

ensombrecido los llamativos compromisos medioambientales internacionales: como parte del Acuerdo de París, Colombia ha prometido deforestación neta cero para el 2020. En 2014, Colombia también se inscribió en el Desafío de Bonn para restaurar 1 millón de hectáreas de bosques para el 2020, una acción que impactaría en el secuestro de aproximadamente 90 millones de toneladas de dióxido de carbono.

La oposición en Florencia refleja un desafío fundamental que reta la estrategia de inversión energética de China en Colombia, e incluso en América Latina en general. Kevin Gallagher, experto en comercio entre China y América Latina en la Universidad de Boston, calculó que el 87% de las inversiones de los bancos de políticas chinas en América Latina se han realizado en energía, minería e infraestructura, con importantes inversiones en combustibles fósiles. En comparación, estos sectores representan sólo el 34% de las inversiones del Banco Mundial.

En la habitación ligeramente estrecha de la Oficina de Coordinación de la Paz de la Universidad de la Amazonia, el profesor Pulecio está ansioso: “Todos sabemos que China está invirtiendo grandes cantidades en la transición a la energía renovable en su propio país, y que ha hecho innovaciones increíbles en tecnologías renovables. Si China llega a América Latina, a Colombia, a la Amazonía, solo para extraer petróleo y recursos naturales, en lugar de ayudar a generar una transición similar, significaría un gran fracaso”.

No hay señales de que el tire y afloje sobre Nogal termine pronto, y en lugares como Morelia y Valparaíso, ha llegado a los tribunales. Un representante de Emerald Energy, Juanita Latorre, rechazó nuestra solicitud, vía correo electrónico, de una entrevista.

No tenemos forma de saber si los vientos de descontento que soplan desde las montañas de Caquetá se sentirán en las salas de reuniones de Bogotá y Beijing.

Ma Tianjie es jefe de redacción de *chinadialogue* en Beijing.

China y Colombia: ¿construyendo la paz?

Este informe se hizo posible por el apoyo generoso de la fundación británica the Network for Social Change

La mayoría de las notas de éste serie se publicaron anteriormente en inglés, castellano y portugués en dialogochino.net y en inglés y chino en chinadialogue.net

Para obtener más información, por favor escribanos en:
infomacion@dialogochino.net

Network
for Social
Change

中拉对话
DIÁLOGO
CHINO